

**No. 48526\***

---

**Spain  
and  
Uruguay**

**Convention between the Kingdom of Spain and the Eastern Republic of Uruguay for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and capital (with protocol). Madrid, 9 October 2009**

**Entry into force:** *24 April 2011 by notification, in accordance with article 28*

**Authentic text:** *Spanish*

**Registration with the Secretariat of the United Nations:** *Spain, 11 May 2011*

*\*No UNTS volume number has yet been determined for this record. The Text(s) reproduced below, if attached, are the authentic texts of the agreement /action attachment as submitted for registration and publication to the Secretariat. For ease of reference they were sequentially paginated. Translations, if attached, are not final and are provided for information only.*

---

**Espagne  
et  
Uruguay**

**Convention entre le Royaume d'Espagne et la République orientale de l'Uruguay tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (avec protocole). Madrid, 9 octobre 2009**

**Entrée en vigueur :** *24 avril 2011 par notification, conformément à l'article 28*

**Texte authentique :** *espagnol*

**Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :** *Espagne, 11 mai 2011*

*\* Numéro de volume RTNU n'a pas encore été établie pour ce dossier. Les textes reproduits ci-dessous, s'ils sont disponibles, sont les textes authentiques de l'accord/pièce jointe d'action tel que soumises pour l'enregistrement et publication au Secrétariat. Pour référence, ils ont été présentés sous forme de la pagination consécutive. Les traductions, s'ils sont inclus, ne sont pas en form finale et sont fournies uniquement à titre d'information.*

[ SPANISH TEXT – TEXTE ESPAGNOL ]

**CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA  
Y LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY  
PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL  
EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y SOBRE EL  
PATRIMONIO**

El Reino de España y la República Oriental del Uruguay, deseando concluir un Convenio para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, han acordado lo siguiente:

## **CAPÍTULO I**

### **ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL CONVENIO**

#### **Artículo 1**

##### **PERSONAS COMPRENDIDAS**

El presente Convenio se aplica a las personas residentes de uno o de ambos Estados contratantes.

#### **Artículo 2**

##### **IMPUESTOS COMPRENDIDOS**

1. El presente Convenio se aplica a los Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio exigibles por cada uno de los Estados contratantes, sus subdivisiones políticas o sus entidades locales, cualquiera que sea el sistema de su exacción.

2. Se consideran Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio los que gravan la totalidad de la renta o del patrimonio o cualquier parte de los mismos, incluidos los impuestos sobre las ganancias derivadas de la enajenación de bienes muebles o inmuebles, los impuestos sobre el importe de sueldos o salarios pagados por las empresas, así como los impuestos sobre las plusvalías.

3. Los impuestos actuales a los que se aplica este Convenio son, en particular:

a) en España:

- i) el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas;
- ii) el Impuesto sobre Sociedades;
- iii) el Impuesto sobre la Renta de no Residentes;
- iv) el Impuesto sobre el Patrimonio; y
- v) los impuestos locales sobre la renta y sobre el patrimonio;

(denominados en lo sucesivo "impuesto español")

b) en Uruguay:

- i) el Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE);
- ii) el Impuesto a las Rentas de las Personas Físicas (IRPF);
- iii) el Impuesto a las Rentas de los No Residentes (IRNR);
- iv) el Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS); y
- v) el Impuesto al Patrimonio (IP)

(denominados en lo sucesivo "impuesto uruguayo").

4. El Convenio se aplicará igualmente a los impuestos de naturaleza idéntica o análoga que se establezcan con posterioridad a la firma del mismo y que se añadan a los actuales o les sustituyan. Las autoridades competentes de los Estados contratantes se comunicarán mutuamente las modificaciones significativas que se hayan introducido en sus respectivas legislaciones fiscales.

## **CAPÍTULO II**

### **DEFINICIONES**

#### **Artículo 3**

#### **DEFINICIONES GENERALES**

1. A los efectos del presente Convenio, a menos que de su contexto se infiera una interpretación diferente:

- a) El término "España" significa el Reino de España y, utilizado en sentido geográfico, significa el territorio del Reino de España, incluyendo el espacio aéreo, sus aguas interiores, su mar territorial y las áreas exteriores a su mar territorial en las que, con arreglo al Derecho internacional y en virtud de su legislación interna, el Reino de España ejerza o pueda ejercer en el futuro jurisdicción o derechos de soberanía respecto del fondo marino, su subsuelo y aguas suprayacentes, y sus recursos naturales;
- b) El término "Uruguay" significa la República Oriental del Uruguay, usado en un sentido geográfico significa el territorio en el que se aplican las leyes impositivas, incluyendo el espacio aéreo, las áreas marítimas, bajo jurisdicción uruguaya o en las que se ejerzan o puedan ejercer en el futuro derechos de soberanía, de acuerdo con el Derecho Internacional y la legislación nacional;
- c) las expresiones "un Estado contratante" y "el otro Estado contratante" significan España o Uruguay, según el contexto;
- d) el término "persona" comprende las personas físicas, las sociedades y cualquier otra agrupación de personas;
- e) el término "sociedad" significa cualquier persona jurídica o cualquier entidad que se considere persona jurídica a efectos impositivos;
- f) el término "empresa" se aplica a la realización de cualquier actividad económica;

- g) las expresiones “empresa de un Estado contratante” y “empresa del otro Estado contratante” significan, respectivamente, una empresa explotada por un residente de un Estado contratante y una empresa explotada por un residente del otro Estado contratante;
- h) la expresión “tráfico internacional” significa todo transporte efectuado por un buque o aeronave explotado por una empresa cuya sede de dirección efectiva esté situada en un Estado contratante, salvo cuando el buque o aeronave se exploten únicamente entre puntos situados en el otro Estado contratante;
- i) la expresión “autoridad competente” significa:
  - (i) en España: el Ministro de Economía y Hacienda o su representante autorizado;
  - (ii) en Uruguay, el Ministerio de Economía y Finanzas, sus representantes o la autoridad en que haya delegado sus atribuciones;
- j) el término “nacional” significa:
  - (i) una persona física que posea la nacionalidad o ciudadanía de un Estado contratante;
  - (ii) una persona jurídica, sociedad personalista o asociación constituida conforme a la legislación vigente en un Estado contratante;
- k) la expresión “actividad económica” incluye la prestación de servicios profesionales, así como cualquier otra actividad de naturaleza independiente.

2. Para la aplicación del Convenio en cualquier momento por un Estado contratante, cualquier término o expresión no definida en el mismo tendrá, a menos que de su contexto se infiera una interpretación diferente, el significado que en ese momento le atribuya la legislación de ese Estado relativa a los impuestos que son objeto del Convenio, prevaleciendo el significado atribuido por la legislación fiscal sobre el que resultaría de otras ramas del Derecho de ese Estado.

#### Artículo 4

### RESIDENTE

1. A los efectos de este Convenio, la expresión “residente de un Estado contratante” significa toda persona que, en virtud de la legislación de ese Estado, esté sujeta a imposición en el mismo por razón de su domicilio, residencia, sede de dirección o cualquier otro criterio de naturaleza análoga, incluyendo también a ese Estado y a sus subdivisiones políticas o entidades locales. Esta expresión no incluye, sin embargo, a las personas que estén sujetas a imposición en ese Estado exclusivamente por la renta que obtengan

de fuentes situadas en el citado Estado, o por el patrimonio situado en el mismo.

2. Cuando en virtud de las disposiciones del apartado 1 una persona física sea residente de ambos Estados contratantes, su situación se resolverá de la siguiente manera:

- a) dicha persona será considerada residente solamente del Estado donde tenga una vivienda permanente a su disposición; si tuviera una vivienda permanente a su disposición en ambos Estados, se considerará residente solamente del Estado con el que mantenga relaciones personales y económicas más estrechas (centro de intereses vitales);
- b) si no pudiera determinarse el Estado en el que dicha persona tiene el centro de sus intereses vitales, o si no tuviera una vivienda permanente a su disposición en ninguno de los Estados, se considerará residente solamente del Estado donde viva habitualmente;
- c) si viviera habitualmente en ambos Estados, o no lo hiciera en ninguno de ellos, se considerará residente solamente del Estado del que sea nacional;
- d) si fuera nacional de ambos Estados, o no lo fuera de ninguno de ellos, las autoridades competentes de los Estados contratantes resolverán el caso de común acuerdo.

3. Cuando en virtud de las disposiciones del apartado 1 una persona que no sea una persona física sea residente de ambos Estados contratantes, se considerará residente solamente del Estado en que se encuentre su sede de dirección efectiva.

## Artículo 5

### ESTABLECIMIENTO PERMANENTE

1. A los efectos del presente Convenio, la expresión "establecimiento permanente" significa un lugar fijo de negocios mediante el cual una empresa realiza toda o parte de su actividad.

2. La expresión "establecimiento permanente" comprende, en particular:

- a) las sedes de dirección;
- b) las sucursales;
- c) las oficinas;
- d) las fábricas;
- e) los talleres; y
- f) las minas, los pozos de petróleo o de gas, las canteras o cualquier otro lugar de extracción de recursos naturales.

3. Una obra o un proyecto de construcción o instalación, sólo constituyen establecimiento permanente si su duración excede de 9 meses.

4. No obstante las disposiciones anteriores de este artículo, se considera que la expresión "establecimiento permanente" no incluye:

- a) la utilización de instalaciones con el único fin de almacenar, exponer o entregar bienes o mercancías pertenecientes a la empresa;
- b) el mantenimiento de un depósito de bienes o mercancías pertenecientes a la empresa con el único fin de almacenarlas, exponerlas o entregarlas;
- c) el mantenimiento de un depósito de bienes o mercancías pertenecientes a la empresa con el único fin de que sean transformadas por otra empresa;
- d) el mantenimiento de un lugar fijo de negocios con el único fin de comprar bienes o mercancías, o de recoger información, para la empresa;
- e) el mantenimiento de un lugar fijo de negocios con el único fin de realizar para la empresa cualquier otra actividad de carácter auxiliar o preparatorio;
- f) el mantenimiento de un lugar fijo de negocios con el único fin de realizar cualquier combinación de las actividades mencionadas en los subapartados a) a e), a condición de que el conjunto de la actividad del lugar fijo de negocios que resulte de esa combinación conserve su carácter auxiliar o preparatorio.

5. No obstante lo dispuesto en los apartados 1 y 2 cuando una persona, distinta de un agente independiente al que será aplicable el apartado 6, actúe por cuenta de una empresa y tenga y ejerza habitualmente en un Estado contratante poderes que la faculden para concluir contratos en nombre de la empresa, se considerará que esa empresa tiene un establecimiento permanente en ese Estado respecto de las actividades que dicha persona realice para la empresa, a menos que las actividades de esa persona se limiten a las mencionadas en el apartado 4 y que, de haber sido realizadas por medio de un lugar fijo de negocios, no hubieran determinado la consideración de dicho lugar fijo de negocios como un establecimiento permanente de acuerdo con las disposiciones de ese apartado.

6. No se considera que una empresa tiene un establecimiento permanente en un Estado contratante por el mero hecho de que realice sus actividades en ese Estado por medio de un corredor, un comisionista general o cualquier otro agente independiente, siempre que dichas personas actúen dentro del marco ordinario de su actividad.

7. El hecho de que una sociedad residente de un Estado contratante controle o sea controlada por una sociedad residente del otro Estado contratante, o que realice actividades económicas en ese otro Estado (ya sea por medio de establecimiento permanente o de otra manera), no convierte por sí solo a cualquiera de estas sociedades en establecimiento permanente de la otra.

**CAPÍTULO III**  
**IMPOSICIÓN DE LAS RENTAS**

Artículo 6

**RENTAS INMOBILIARIAS**

1. Las rentas que un residente de un Estado contratante obtenga de bienes inmuebles (incluidas las rentas de explotaciones agrícolas o forestales) situados en el otro Estado contratante pueden someterse a imposición en ese otro Estado.

2. La expresión "bienes inmuebles" tendrá el significado que le atribuya el derecho del Estado contratante en que los bienes estén situados. Dicha expresión comprende en todo caso los bienes accesorios a los bienes inmuebles, el ganado y el equipo utilizado en las explotaciones agrícolas y forestales, los derechos a los que sean aplicables las disposiciones de derecho privado relativas a los bienes raíces, el usufructo de bienes inmuebles y el derecho a percibir pagos fijos o variables en contraprestación por la explotación, o la concesión de la explotación, de yacimientos minerales, fuentes y otros recursos naturales. Los buques, embarcaciones y aeronaves no tendrán la consideración de bienes inmuebles.

3. Las disposiciones del apartado 1 son aplicables a los rendimientos derivados de la utilización directa, el arrendamiento o aparcería, así como de cualquier otra forma de explotación de los bienes inmuebles.

4. Cuando la propiedad de acciones u otros derechos atribuyan directa o indirectamente al propietario de dichas acciones o derechos el derecho al disfrute de los bienes inmuebles, las rentas derivadas de la utilización directa, arrendamiento o uso en cualquier otra forma de tal derecho de disfrute, pueden someterse a imposición en el Estado contratante en que los bienes inmuebles estén situados.

5. Las disposiciones de los apartados 1, 3 y 4 se aplican igualmente a las rentas derivadas de los bienes inmuebles de una empresa.

Artículo 7

**BENEFICIOS EMPRESARIALES**

1. Los beneficios de una empresa de un Estado contratante solamente pueden someterse a imposición en ese Estado, a no ser que la empresa realice su actividad en el otro Estado contratante por medio de un establecimiento permanente situado en él. Si la empresa realiza su actividad de dicha manera, los beneficios de la empresa pueden someterse a imposición en el otro Estado, pero sólo en la medida en que sean imputables a ese establecimiento permanente.



2. Sin perjuicio de las disposiciones del apartado 3, cuando una empresa de un Estado contratante realice su actividad en el otro Estado contratante por medio de un establecimiento permanente situado en él, en cada Estado contratante se atribuirán a dicho establecimiento permanente los beneficios que el mismo hubiera podido obtener de ser una empresa distinta y separada que realizase las mismas o similares actividades, en las mismas o similares condiciones y tratase con total independencia con la empresa de la que es establecimiento permanente.

3. Para la determinación del beneficio del establecimiento permanente se permitirá la deducción de los gastos realizados para los fines del establecimiento permanente, comprendidos los gastos de dirección y generales de administración para los mismos fines, tanto si se efectúan en el Estado en que se encuentra el establecimiento permanente como en otra parte.

4. No se atribuirán beneficios a un establecimiento permanente por razón de la simple compra de bienes o mercancías por ese establecimiento permanente para la empresa.

5. A los efectos de los apartados anteriores, los beneficios imputables al establecimiento permanente se determinarán cada año por el mismo método, a no ser que existan motivos válidos y suficientes para proceder de otra forma.

6. Cuando los beneficios comprendan rentas reguladas separadamente en otros artículos de este Convenio, las disposiciones de aquéllos no quedarán afectadas por las del presente artículo.

## Artículo 8

### **TRANSPORTE MARÍTIMO Y AÉREO**

1. Los beneficios procedentes de la explotación de buques o aeronaves en tráfico internacional sólo pueden someterse a imposición en el Estado contratante en que esté situada la sede de dirección efectiva de la empresa.

2. A los efectos del presente artículo, la expresión "beneficios procedentes de la explotación de buques o aeronaves en tráfico internacional" comprende asimismo los beneficios derivados ocasionalmente de:

a) el arrendamiento de buques o aeronaves vacíos y

b) el uso o arrendamiento de contenedores (incluidos los trailer y el correspondiente equipo destinado al transporte de los contenedores),

si dichas actividades forman parte de la explotación de buques o aeronaves en tráfico internacional.

3. Si la sede de dirección efectiva de una empresa de transporte marítimo estuviera a bordo de un buque o embarcación, se considerará situada en el Estado contratante donde esté el puerto base del buque o embarcación, o si no

existiera tal puerto base, en el Estado contratante del que sea residente la persona que explota el buque.

4. Las disposiciones del apartado 1 se aplican también a los beneficios procedentes de la participación en un "pool", en una explotación en común o en un organismo de explotación internacional.

#### Artículo 9

### **EMPRESAS ASOCIADAS**

1. Cuando

- a) una empresa de un Estado contratante participe directa o indirectamente en la dirección, el control o el capital de una empresa del otro Estado contratante, o
- b) unas mismas personas participen directa o indirectamente en la dirección, el control o el capital de una empresa de un Estado contratante y de una empresa del otro Estado contratante,

y en uno y otro caso las dos empresas estén, en sus relaciones comerciales o financieras, unidas por condiciones aceptadas o impuestas que difieran de las que serían acordadas por empresas independientes, los beneficios que habrían sido obtenidos por una de las empresas de no existir dichas condiciones, y que de hecho no se han realizado a causa de las mismas, podrán incluirse en los beneficios de esa empresa y someterse a imposición en consecuencia.

2. Cuando un Estado contratante incluya en los beneficios de una empresa de ese Estado –y someta, en consecuencia, a imposición– los beneficios sobre los cuales una empresa del otro Estado ha sido sometida a imposición en ese otro Estado contratante, y ese otro Estado reconozca que los beneficios así incluidos son beneficios que habrían sido realizados por la empresa del Estado mencionado en primer lugar si las condiciones convenidas entre las dos empresas hubieran sido las que se hubiesen convenido entre empresas independientes, ese otro Estado practicará el ajuste que proceda a la cuantía del impuesto que ha gravado esos beneficios. Para determinar dicho ajuste se tendrán en cuenta las demás disposiciones del presente Convenio y las autoridades competentes de los Estados contratantes se consultarán en caso necesario.

#### Artículo 10

### **DIVIDENDOS**

1. Los dividendos pagados por una sociedad residente de un Estado contratante a un residente del otro Estado contratante pueden someterse a imposición en ese otro Estado.

2. Sin embargo, dichos dividendos pueden someterse también a imposición en el Estado contratante en que resida la sociedad que paga los dividendos y

según la legislación de ese Estado, pero si el beneficiario efectivo de los dividendos es un residente del otro Estado contratante, el impuesto así exigido no podrá exceder del 5 por 100 del importe bruto de los dividendos.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, el Estado contratante en el que la sociedad que paga los dividendos sea residente considerará exentos los dividendos pagados por esa sociedad a una sociedad cuyo capital esté total o parcialmente dividido en acciones o participaciones y que sea residente del otro Estado contratante, siempre que ésta posea directamente al menos el 75 por ciento del capital de la sociedad que paga los dividendos.

Estos dos últimos párrafos no afectan a la imposición de la sociedad respecto de los beneficios con cargo a los que se pagan los dividendos.

3. El término "dividendos" en el sentido de este artículo significa los rendimientos de las acciones, de las acciones o bonos de disfrute, de las partes de minas, de las partes de fundador u otros derechos que permitan participar en los beneficios, excepto los de crédito, así como los rendimientos sujetos al mismo régimen fiscal que los rendimientos de las acciones o participaciones por la legislación del Estado del que la sociedad que realiza la distribución sea residente.

4. Las disposiciones de los apartados 1 y 2 no son aplicables si el beneficiario efectivo de los dividendos, residente de un Estado contratante, realiza en el otro Estado contratante, del que es residente la sociedad que paga los dividendos, una actividad económica a través de un establecimiento permanente situado allí, y la participación que genera los dividendos está vinculada efectivamente a dicho establecimiento permanente. En tal caso, son aplicables las disposiciones del artículo 7.

5. Cuando una sociedad residente de un Estado contratante obtenga beneficios o rentas procedentes del otro Estado contratante, ese otro Estado no podrá exigir ningún impuesto sobre los dividendos pagados por la sociedad, salvo en la medida en que esos dividendos se paguen a un residente de ese otro Estado o la participación que genera los dividendos esté vinculada efectivamente a un establecimiento permanente situado en ese otro Estado, ni someter los beneficios no distribuidos de la sociedad a un impuesto sobre los mismos, aunque los dividendos pagados o los beneficios no distribuidos consistan, total o parcialmente, en beneficios o rentas procedentes de ese otro Estado.

6. No obstante las restantes disposiciones de este Convenio, cuando una sociedad residente de un Estado contratante tenga un establecimiento permanente en el otro Estado contratante, ese otro Estado contratante podrá someter a imposición las remesas de beneficios, o lo que se considere como tales, transferidas por el establecimiento permanente a la sociedad residente del Estado contratante mencionado en primer lugar, pero el impuesto así exigido no podrá exceder del 0 por ciento del importe bruto.

Artículo 11

**INTERESES**

1. Los intereses procedentes de un Estado Contratante y pagados a un residente del otro Estado Contratante pueden someterse a imposición en este otro Estado

2. Sin embargo, estos intereses también pueden someterse a imposición en el Estado Contratante del que procedan, de conformidad con la legislación de dicho Estado; pero si el beneficiario efectivo de los intereses es residente del otro Estado Contratante, el impuesto no podrá exceder del 10 por ciento del importe bruto de los intereses.

3. No obstante lo dispuesto en el apartado 2, los intereses procedentes de un Estado contratante y pagados a un residente del otro Estado contratante pueden someterse exclusivamente a imposición en ese otro Estado si el perceptor coincide con el beneficiario efectivo de los intereses y:

a) es el propio Estado o el Banco Central, una de sus subdivisiones políticas, o entidades locales;

b) el pagador de los intereses es el Estado del que proceden, o una de sus subdivisiones políticas y entidades locales;

c) los intereses se pagan por razón de un préstamo o crédito debido, concedido, otorgado, garantizado o asegurado por ese Estado, o una subdivisión política, entidad local u organismo de crédito a la exportación;

d) es una institución financiera por un préstamo a un plazo igual o superior a 3 años destinado a financiar a proyectos de inversión;

e) el interés se paga por razón de una deuda surgida como consecuencia de la venta a crédito de cualquier equipo, mercancía o servicio;

f) es un fondo de pensiones aprobado a efectos fiscales por ese Estado y la renta de dicho fondo está, en términos generales, exenta de tributación en ese Estado.

4. El término "intereses" en el sentido de este artículo significa los rendimientos de créditos de cualquier naturaleza, con o sin garantía hipotecaria o cláusula de participación en los beneficios del deudor y, en particular, los rendimientos de valores públicos y los rendimientos de bonos u obligaciones, incluidas las primas y lotes unidos a esos títulos, así como cualesquiera otras rentas que se sometan al mismo régimen que los rendimientos de los capitales prestados por la legislación fiscal del Estado del que procedan las rentas. Las penalizaciones por mora en el pago no se consideran intereses a efectos del presente artículo. El término "intereses" no incluye a los ingresos considerados dividendos de conformidad con el artículo 10.

5. Las disposiciones de los apartados 1 a 3 no se aplican si el beneficiario efectivo de los intereses, residente de un Estado contratante, realiza en el otro

Estado contratante, del que proceden los intereses, una actividad económica por medio de un establecimiento permanente situado en ese otro Estado, y el crédito que genera los intereses está vinculado efectivamente a dicho establecimiento permanente. En tal caso se aplicarán las disposiciones del artículo 7.

6. Los intereses se considerarán procedentes de un Estado Contratante cuando el deudor sea un residente de este Estado. Sin embargo, cuando el deudor de los intereses, sea o no residente de un Estado Contratante, tenga en un Estado Contratante un establecimiento permanente en relación con el cual se haya contraído la deuda que da origen a los intereses y tal establecimiento soporte el pago de los mismos, los intereses se considerarán procedentes del Estado Contratante donde esté situado el establecimiento permanente.

7. Cuando por razón de las relaciones especiales existentes entre el deudor y el beneficiario efectivo, o de las que uno y otro mantengan con terceros, el importe de los intereses habida cuenta del crédito por el que se paguen exceda del que hubieran convenido el deudor y el acreedor en ausencia de tales relaciones, las disposiciones de este artículo no se aplicarán más que a este último importe. En tal caso, el exceso podrá someterse a imposición de acuerdo con la legislación de cada Estado contratante, teniendo en cuenta las demás disposiciones del presente Convenio.

## Artículo 12

### **CÁNONES O REGALÍAS**

1. Los cánones o regalías procedentes de un Estado Contratante y pagadas a un residente del otro Estado Contratante pueden someterse a imposición en este otro Estado.

2. Sin embargo, estas regalías también pueden someterse a imposición en el Estado Contratante del que procedan, de conformidad con la legislación de dicho Estado; pero si el beneficiario efectivo de los cánones o regalías es residente del otro Estado Contratante, el impuesto no podrá exceder del:

- a) 5 por ciento del importe bruto de los cánones o regalías en el caso de los derechos de autor sobre obras literarias, artísticas o científicas;
- b) 10 por ciento del importe bruto de los cánones o regalías en el resto de los casos.

3. El término "cánones o regalías" en el sentido de este artículo significa las cantidades de cualquier clase pagadas por el uso, o la concesión de uso, de derechos de autor, incluidas las películas cinematográficas o películas, cintas y otros medios de reproducción de la imagen y el sonido, de patentes, marcas de fábrica o de comercio, dibujos o modelos, planos, fórmulas o procedimientos secretos, o por el uso, o la concesión de uso, de equipos industriales, comerciales o científicos, o por informaciones relativas a experiencias industriales, comerciales o científicas.

4. Las disposiciones de los apartados 1 y 2 no se aplican si el beneficiario efectivo de los cánones o regalías, residente de un Estado contratante, realiza en el otro Estado contratante, del que proceden los cánones o regalías, una actividad económica por medio de un establecimiento permanente situado en ese otro Estado, y el derecho o bien por el que se pagan los cánones o regalías está vinculado efectivamente a dicho establecimiento permanente. En tales casos se aplicarán las disposiciones del artículo 7.

5. Para efectos del presente Artículo los cánones o regalías se considerarán procedentes de un Estado Contratante cuando el deudor sea un residente de este Estado. Sin embargo, cuando el deudor de los cánones o regalías, residente o no de uno de los Estados Contratantes, tenga en un Estado Contratante un establecimiento permanente respecto del cual se genere la obligación de pagar los cánones o regalías y las mismas sean soportadas por dicho establecimiento permanente, se considerará que los cánones o regalías proceden del Estado en el que esté ubicado el establecimiento permanente.

6. Cuando, por razón de las relaciones especiales existentes entre el deudor y el beneficiario efectivo de los cánones, o de las que uno y otro mantengan con terceros, el importe de los cánones, habida cuenta del uso, derecho o información por los que se pagan, exceda del que habrían convenido el deudor y el beneficiario efectivo en ausencia de tales relaciones, las disposiciones de este artículo no se aplicarán más que a este último importe. En tal caso, el exceso podrá someterse a imposición de acuerdo con la legislación de cada Estado contratante, teniendo en cuenta las demás disposiciones del presente Convenio.

### Artículo 13

#### **GANANCIAS DE CAPITAL**

1. Las ganancias que un residente de un Estado contratante obtenga de la enajenación de bienes inmuebles tal como se definen en el artículo 6, situados en el otro Estado contratante, pueden someterse a imposición en ese otro Estado.

2. Las ganancias derivadas de la enajenación de bienes muebles que formen parte del activo de un establecimiento permanente que una empresa de un Estado contratante tenga en el otro Estado contratante, comprendidas las ganancias derivadas de la enajenación de dicho establecimiento permanente (sólo o con el conjunto de la empresa), pueden someterse a imposición en ese otro Estado contratante.

3. Las ganancias derivadas de la enajenación de buques o aeronaves explotados en tráfico internacional o de bienes muebles afectos a la explotación de tales buques o aeronaves, sólo pueden someterse a imposición en el Estado contratante en que esté situada la sede de dirección efectiva de la empresa.

Artículo 15

**PARTICIPACIONES DE CONSEJEROS**

Las participaciones y otras retribuciones similares que un residente de un Estado contratante obtenga como miembro de un Consejo de Administración o Directorio de una sociedad residente del otro Estado contratante pueden someterse a imposición en ese otro Estado.

Artículo 16

**ARTISTAS Y DEPORTISTAS**

1. No obstante lo dispuesto en los artículos 7 y 14, las rentas que un residente de un Estado contratante obtenga del ejercicio de su actividad personal en el otro Estado contratante en calidad de artista del espectáculo, actor de teatro, cine, radio o televisión, o músico, o como deportista, pueden someterse a imposición en ese otro Estado.

2. No obstante lo dispuesto en los artículos 7 y 14, cuando las rentas derivadas de las actividades personales de los artistas del espectáculo o los deportistas, en esa calidad, se atribuyan no ya al propio artista del espectáculo o deportista sino a otra persona, dichas rentas pueden someterse a imposición en el Estado contratante donde se realicen las actividades del artista del espectáculo o del deportista.

3. No obstante las disposiciones de los apartados 1 y 2 de este artículo, las rentas obtenidas por un artista o deportista estarán exentas de imposición en el Estado contratante en que se realicen dichas actividades cuando estén financiadas al menos en un 50 por ciento con fondos públicos de uno o de ambos Estados y se realicen al amparo de un acuerdo de colaboración cultural entre los Estados contratantes.

Artículo 17

**PENSIONES**

Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 18, las pensiones y remuneraciones análogas pagadas a un residente de un Estado contratante por razón de un empleo anterior sólo pueden someterse a imposición en ese Estado.

## Artículo 18

### REMUNERACIONES POR FUNCIÓN PÚBLICA

1.
  - a) Los sueldos, salarios y otras remuneraciones similares, pagadas por un Estado contratante o por una de sus subdivisiones políticas o entidades locales a una persona física por razón de servicios prestados a ese Estado o a esa subdivisión o entidad, sólo pueden someterse a imposición en ese Estado.
  - b) Sin embargo, dichos sueldos, salarios y remuneraciones similares sólo pueden someterse a imposición en el otro Estado contratante si los servicios se prestan en ese Estado y la persona física es un residente de ese Estado que:
    - (i) es nacional de ese Estado; o
    - (ii) no ha adquirido la condición de residente de ese Estado solamente para prestar los servicios.
2.
  - a) No obstante lo dispuesto en el apartado 1, las pensiones y otras remuneraciones análogas, pagadas por un Estado contratante o por una de sus subdivisiones políticas o entidades locales, bien directamente o con cargo a fondos constituidos, a una persona física por razón de servicios prestados a ese Estado o a esa subdivisión o entidad, sólo pueden someterse a imposición en ese Estado.
  - b) Sin embargo, dichas pensiones y remuneraciones análogas sólo pueden someterse a imposición en el otro Estado contratante si la persona física es residente y nacional de ese Estado.
3. Lo dispuesto en los artículos 14, 15, 16 y 17 se aplica a los sueldos, salarios, pensiones, y otras remuneraciones análogas, pagados por razón de servicios prestados en el marco de una actividad económica realizada por un Estado contratante o por una de sus subdivisiones políticas o entidades locales.

## Artículo 19

### ESTUDIANTES

Las cantidades que reciba para cubrir sus gastos de mantenimiento, estudios o formación práctica un estudiante o una persona en prácticas que sea, o haya sido inmediatamente antes de llegar a un Estado contratante, residente del otro Estado contratante y que se encuentre en el Estado mencionado en primer lugar con el único fin de proseguir sus estudios o formación práctica, no pueden someterse a imposición en ese Estado siempre que proceda de fuentes situadas fuera de ese Estado.



## Artículo 20

### **OTRAS RENTAS**

1. Las rentas de un residente de un Estado contratante, cualquiera que fuese su procedencia, no mencionadas en los anteriores artículos del presente Convenio, se someterán a imposición únicamente en ese Estado.

2. Lo dispuesto en el apartado 1 no es aplicable a las rentas, distintas de las derivadas de bienes inmuebles en el sentido del apartado 2 del artículo 6, cuando el beneficiario de dichas rentas, residente de un Estado contratante, realice en el otro Estado contratante una actividad económica por medio de un establecimiento permanente situado en ese otro Estado, y el derecho o bien por el que se pagan las rentas esté vinculado efectivamente con dicho establecimiento permanente. En tal caso, son aplicables las disposiciones del artículo 7.

## **CAPÍTULO IV**

### **IMPOSICIÓN DEL PATRIMONIO**

## Artículo 21

### **PATRIMONIO**

1. El patrimonio constituido por bienes inmuebles en el sentido del artículo 6, que posea un residente de un Estado contratante y esté situado en el otro Estado contratante, puede someterse a imposición en ese otro Estado.

2. El patrimonio constituido por bienes muebles que formen parte del activo de un establecimiento permanente que una empresa de un Estado contratante posea en el otro Estado contratante, puede someterse a imposición en ese otro Estado contratante.

3. El patrimonio constituido por buques o aeronaves explotados en tráfico internacional, así como por bienes muebles afectos a la explotación de tales buques y aeronaves, sólo puede someterse a imposición en el Estado contratante en que esté situada la sede de dirección efectiva de la empresa.

4. El patrimonio constituido por acciones u otros derechos en una sociedad o en cualquier otro tipo de persona jurídica, cuyo valor se derive en más de un 50 por ciento, directa o indirectamente, de bienes inmuebles situados en un Estado contratante o por acciones u otros derechos que otorguen al propietario de los mismos el derecho al disfrute de bienes inmuebles situados en un Estado contratante, pueden someterse a imposición en el Estado contratante en que esté situado el bien inmueble.

5. Todos los demás elementos patrimoniales de un residente de un Estado contratante sólo pueden someterse a imposición en ese Estado.

## CAPÍTULO V

### MÉTODOS PARA ELIMINAR LA DOBLE IMPOSICIÓN

#### Artículo 22

#### ELIMINACIÓN DE LA DOBLE IMPOSICIÓN

1. En España, la doble imposición se evitará bien de conformidad con las disposiciones de su legislación interna o conforme a las siguientes disposiciones, sujetas a la legislación interna de España:

a) Cuando un residente de España obtenga rentas o posea elementos patrimoniales que, con arreglo a las disposiciones de este Convenio puedan someterse a imposición en Uruguay, España permitirá:

- i) la deducción del impuesto sobre la renta de ese residente por un importe igual al impuesto sobre la renta pagado en Uruguay;
- ii) la deducción del impuesto sobre el patrimonio de ese residente por un importe igual al impuesto pagado en Uruguay sobre esos elementos patrimoniales;
- iii) la deducción del impuesto sobre sociedades efectivamente pagado por la sociedad que reparte los dividendos correspondiente a los beneficios con cargo a los cuales dichos dividendos se pagan, de acuerdo con su legislación interna.

Sin embargo, dicha deducción no podrá exceder de la parte del impuesto sobre la renta o del impuesto sobre el patrimonio, calculados antes de la deducción, correspondiente a las rentas o a los elementos patrimoniales que puedan someterse a imposición en Uruguay.

b) Cuando con arreglo a cualquier disposición de este Convenio las rentas obtenidas por un residente de España o el patrimonio que posea estén exentos de impuestos en España, España podrá, no obstante, tomar en consideración las rentas o el patrimonio exentos para calcular el impuesto sobre el resto de las rentas o el patrimonio de ese residente.

2. En Uruguay, la doble imposición se evitará de conformidad con las disposiciones de su legislación interna o de acuerdo a las siguientes disposiciones:

- a) Cuando un residente de Uruguay obtenga rentas o posea elementos patrimoniales que, con arreglo a las disposiciones de este Convenio puedan someterse a imposición en España, Uruguay permitirá:

- i) La determinación del impuesto correspondiente deduciendo del impuesto sobre la renta, que haya de pagarse en Uruguay sobre rentas procedentes de España, de acuerdo con las leyes uruguayas, el impuesto pagado al fisco español conforme a las leyes españolas;
- ii) La deducción del impuesto sobre el patrimonio de ese residente por un importe igual al impuesto pagado en España sobre esos elementos patrimoniales;
- iii) La deducción del impuesto sobre sociedades efectivamente pagado por la sociedad que reparte los dividendos correspondiente a los beneficios con cargo a los cuales dichos dividendos se pagan, de acuerdo con su legislación interna.

El importe de la deducción no podrá exceder, sin embargo, la parte del impuesto uruguayo, correspondiente a dichas rentas o bienes antes de hecha la deducción.

- b) Cuando con arreglo a cualquier disposición de este Convenio las rentas obtenidas por un residente de Uruguay o el patrimonio que posea estén exentos de impuestos en Uruguay, Uruguay podrá, no obstante, tomar en consideración las rentas o el patrimonio exentos para calcular el impuesto sobre el resto de las rentas o el patrimonio de ese residente.

## **LO VI**

### **DISPOSICIONES ESPECIALES**

#### **Artículo 23**

#### **NO DISCRIMINACIÓN**

1. Los nacionales de un Estado contratante no estarán sometidos en el otro Estado contratante a ningún impuesto ni obligación relativa al mismo que no se exijan o que sean más gravosos que aquellos a los que estén o puedan estar sometidos los nacionales de ese otro Estado que se encuentren en las mismas condiciones, en particular con respecto a la residencia. No obstante lo dispuesto en el artículo 1, la presente disposición se aplicará también a las personas que no sean residentes de uno o de ninguno de los Estados contratantes.

2. Los establecimientos permanentes que una empresa de un Estado contratante tenga en el otro Estado contratante no estarán sometidos a imposición en ese Estado de manera menos favorable que las empresas de ese otro Estado que realicen las mismas actividades. Esta disposición no podrá interpretarse en el sentido de obligar a un Estado contratante a conceder a los residentes del otro Estado contratante las deducciones personales,

desgravaciones y reducciones impositivas que otorgue a sus propios residentes en consideración a su estado civil o cargas familiares.

3. A menos que se apliquen las disposiciones del apartado 1 del artículo 9, del apartado 7 del artículo 11, o del apartado 6 del artículo 12, los intereses, cánones o regalías y demás gastos pagados por una empresa de un Estado contratante a un residente del otro Estado contratante serán deducibles para determinar los beneficios sujetos a imposición de dicha empresa, en las mismas condiciones que si se hubieran pagado a un residente del Estado mencionado en primer lugar. Igualmente, las deudas de una empresa de un Estado contratante contraídas con un residente del otro Estado contratante serán deducibles para la determinación del patrimonio sometido a imposición de dicha empresa en las mismas condiciones que si se hubieran contraído con un residente del Estado mencionado en primer lugar.

4. Las empresas de un Estado contratante cuyo capital esté, total o parcialmente, poseído o controlado, directa o indirectamente, por uno o varios residentes del otro Estado contratante, no se someterán en el Estado mencionado en primer lugar a ningún impuesto u obligación relativa al mismo que no se exijan o que sean más gravosos que aquellos a los que estén o puedan estar sometidas otras empresas similares del Estado mencionado en primer lugar.

5. No obstante lo dispuesto en el artículo 2, las disposiciones del presente artículo se aplican a todos los impuestos cualquiera que sea su naturaleza o denominación.

#### Artículo 24

### **PROCEDIMIENTO AMISTOSO**

1. Cuando una persona considere que las medidas adoptadas por uno o por ambos Estados contratantes implican o pueden implicar para ella una imposición que no esté conforme con las disposiciones del presente Convenio, con independencia de los recursos previstos por el Derecho interno de esos Estados, podrá someter su caso a la autoridad competente del Estado contratante del que sea residente o, si fuera aplicable el apartado 1 del artículo 23, a la del Estado contratante del que sea nacional. El caso deberá plantearse dentro de los tres años siguientes a la primera notificación de la medida que implique una imposición no conforme a las disposiciones del Convenio.

2. La autoridad competente, si la reclamación le parece fundada y si no puede por sí misma llegar a una solución satisfactoria, hará lo posible por resolver la cuestión mediante un acuerdo amistoso con la autoridad competente del otro Estado contratante, a fin de evitar una imposición que no se ajuste a este Convenio. El acuerdo será aplicable independientemente de los plazos previstos por el Derecho interno de los Estados contratantes.

3. Las autoridades competentes de los Estados contratantes harán lo posible por resolver las dificultades o las dudas que plantee la interpretación o aplicación del Convenio mediante un acuerdo amistoso. También podrán

ponerse de acuerdo para tratar de evitar la doble imposición en los casos no previstos en el Convenio.

4. Las autoridades competentes de los Estados contratantes podrán comunicarse directamente entre sí a fin de llegar a un acuerdo en el sentido de los apartados anteriores. Cuando se considere que este acuerdo puede facilitarse mediante un intercambio verbal de opiniones, éste podrá realizarse a través de una comisión compuesta por representantes de las autoridades competentes de los Estados contratantes.

## Artículo 25

### INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN

1. Las autoridades competentes de los Estados contratantes intercambiarán la información que previsiblemente pueda resultar de interés para aplicar lo dispuesto en el presente Convenio, o para la administración o la aplicación del Derecho interno relativo a los impuestos de toda naturaleza o denominación exigibles por los Estados contratantes, sus subdivisiones políticas o entidades locales, en la medida en que la imposición así exigida no sea contraria al Convenio. El intercambio de información no está limitado por los artículos 1 y 2.

2. La información recibida por un Estado contratante en virtud del apartado 1 será mantenida secreta de la misma forma que la información obtenida en virtud del Derecho interno de este Estado y sólo se comunicará a las personas o autoridades (incluidos los tribunales y órganos administrativos) encargados de la gestión o recaudación de los impuestos a los que hace referencia el apartado 1, de los procedimientos declarativos o ejecutivos relativos a estos impuestos o de la resolución de los recursos en relación con los mismos. Estas personas o autoridades sólo utilizarán esta información para dichos fines. Podrán revelar la información en las audiencias públicas de los tribunales o en las sentencias judiciales.

No obstante lo anterior, la información recibida por un Estado contratante podrá utilizarse con otros fines, cuando dicha utilización esté permitida por las leyes del Estado que proporciona la información.

3. En ningún caso las disposiciones de los párrafos 1 y 2 pueden interpretarse en el sentido de obligar a un Estado contratante a:

- a) adoptar medidas administrativas contrarias a su legislación o práctica administrativa o a las del otro Estado contratante;
- b) suministrar información que no se pueda obtener sobre la base de su propia legislación o en el ejercicio de su práctica administrativa normal o de las del otro Estado contratante; y
- c) suministrar información que revele un secreto empresarial, industrial, comercial o profesional o un proceso industrial, o información cuya comunicación sea contraria al orden público (ordre public).

4. Si un Estado contratante solicita información conforme al presente artículo, el otro Estado contratante utilizará las medidas para recabar información de que disponga con el fin de obtener la información solicitada, aún cuando ese otro Estado pueda no necesitar dicha información para sus propios fines tributarios. La obligación precedente está limitada por lo dispuesto en el apartado 3 excepto cuando tales limitaciones impidieran a un Estado contratante proporcionar información exclusivamente por la ausencia de interés nacional en la misma.

5. En ningún caso las disposiciones del apartado 3 se interpretarán en el sentido de permitir a un Estado contratante negarse a proporcionar información únicamente porque esta obre en poder de bancos, otras instituciones financieras, o de cualquier persona que actúe en calidad representativa o fiduciaria o porque esté relacionada con derechos de propiedad en una persona.

## Artículo 26

### ASISTENCIA EN LA RECAUDACIÓN

1. Los Estados contratantes se prestarán asistencia mutua en la recaudación de sus créditos tributarios. Esta asistencia no está limitada por los artículos 1 y 2. Las autoridades competentes de los Estados contratantes podrán establecer de mutuo acuerdo el modo de aplicación de este artículo.

2. La expresión "crédito tributario" en el sentido de este artículo, significa todo importe debido en concepto de impuestos de cualquier naturaleza o denominación exigibles por los Estados contratantes, sus subdivisiones políticas o sus entidades locales, en la medida en que esta imposición no sea contraria al presente Convenio o a cualquier otro instrumento del que los Estados contratantes sean parte; la expresión comprende igualmente los intereses, sanciones administrativas y costes de recaudación o de establecimiento de medidas cautelares relacionados con dicho importe.

3. Cuando un crédito tributario de un Estado contratante sea exigible en virtud del Derecho de ese Estado y el deudor sea una persona que conforme al Derecho de ese Estado no pueda impedir en ese momento la recaudación, a petición de las autoridades competentes de dicho Estado, las autoridades competentes del otro Estado contratante aceptarán dicho crédito tributario a los efectos de su recaudación. Dicho otro Estado cobrará el crédito tributario de acuerdo con lo dispuesto en su legislación relativa a la aplicación y recaudación de sus propios impuestos como si se tratara de un crédito tributario propio.

4. Cuando un crédito tributario de un Estado Contratante sea de naturaleza tal que ese Estado pueda, en virtud de su Derecho interno, adoptar medidas cautelares que aseguren su recaudación, las autoridades competentes del otro Estado Contratante, a petición de las autoridades competentes del primer Estado; aceptarán dicho crédito tributario para los fines de adoptar tales medidas cautelares. Ese otro Estado adoptará las medidas cautelares de acuerdo con lo dispuesto en su legislación como si se tratara de un crédito tributario propio, aun cuando en el momento de aplicación de dichas medidas el

crédito tributario no fuera exigible en el Estado mencionado en primer lugar o su deudor fuera una persona con derecho a impedir su recaudación.

5. No obstante lo dispuesto en los apartados 3 y 4, un crédito tributario aceptado por un Estado contratante a los efectos de dichos apartados, no estará sujeto en ese Estado a la prescripción o prelación aplicables a los créditos tributarios conforme a su Derecho interno por razón de su naturaleza. Asimismo, un crédito tributario aceptado por un Estado contratante a los efectos de los párrafos 3 ó 4 no disfrutará en ese Estado de las prelación aplicables a los créditos tributarios en virtud del Derecho del otro Estado contratante.

6. Los procedimientos relativos a la existencia, validez o cuantía del crédito tributario de un Estado contratante no podrán incoarse ante los tribunales u órganos administrativos del otro Estado contratante.

7. Cuando en un momento posterior a la solicitud de recaudación realizada por un Estado contratante en virtud de los apartados 3 o 4, y previo a su recaudación y remisión por el otro Estado contratante, el crédito tributario dejara de ser

- a) en el caso de una solicitud presentada en virtud del apartado 3, un crédito exigible conforme al Derecho interno del Estado mencionado en primer lugar y cuyo deudor fuera una persona que en ese momento y según el Derecho de ese Estado no pudiera impedir su recaudación, o
- b) en el caso de una solicitud presentada en virtud del apartado 4, un crédito con respecto a la cual, conforme al Derecho interno del Estado mencionado en primer lugar, pudieran adoptarse medidas cautelares para asegurar su recaudación

las autoridades competentes del Estado mencionado en primer lugar notificarán sin dilación a las autoridades competentes del otro Estado ese hecho y, según decida ese otro Estado, el Estado mencionado en primer lugar suspenderá o retirará su solicitud.

8. En ningún caso las disposiciones de este artículo se interpretarán en el sentido de obligar a un Estado contratante a:

- a) adoptar medidas administrativas contrarias a su legislación o práctica administrativa o a las del otro Estado contratante;
- b) adoptar medidas contrarias al orden público (ordre public);
- c) suministrar asistencia cuando el otro Estado contratante no haya aplicado todas las medidas cautelares o para la recaudación, según sea el caso, de que disponga conforme a su legislación o práctica administrativa;
- d) suministrar asistencia en aquellos casos en que la carga administrativa para ese Estado esté claramente desproporcionada

con respecto al beneficio que vaya a obtener el otro Estado contratante.

#### Artículo 27

### **MIEMBROS DE MISIONES DIPLOMÁTICAS Y DE OFICINAS CONSULARES**

Las disposiciones del presente Convenio no afectarán a los privilegios fiscales de que disfruten los miembros de las misiones diplomáticas o de las oficinas consulares de acuerdo con las normas generales del Derecho internacional o en virtud de las disposiciones de acuerdos especiales.

## **CAPÍTULO VII**

### **DISPOSICIONES FINALES**

#### Artículo 28

### **ENTRADA EN VIGOR**

1. Cada uno de los gobiernos de los Estados contratantes notificará al otro, por conducto diplomático, que se han cumplido los procedimientos internos exigidos en cada Estado contratante para la entrada en vigor del presente Convenio.
2. El Convenio entrará en vigor transcurrido un plazo de tres meses a partir de la fecha de recepción de la última notificación a que se refiere el apartado 1 y sus disposiciones surtirán efecto:
  - a) con respecto a los impuestos que se perciban por el sistema de retención en la fuente, a las cantidades pagadas a partir del 1 de enero, inclusive, del año natural inmediatamente posterior a la fecha de entrada en vigor del presente Convenio.
  - b) con respecto al impuesto sobre el patrimonio, a partir del 1 de enero del año natural inmediatamente posterior a la fecha de entrada en vigor del presente Convenio.
  - c) con respecto a los restantes impuestos, a los períodos impositivos que se inicien en o a partir del 1 de enero del año natural inmediatamente posterior a la fecha de entrada en vigor del presente Convenio.
  - d) en los restantes casos, en la fecha en que el Convenio entre en vigor.



Artículo 29

**DENUNCIA**

El presente Convenio permanecerá en vigor hasta su denuncia por uno de los Estados contratantes. Cualquiera de los Estados contratantes podrá notificar por escrito la denuncia del Convenio al otro Estado contratante, por conducto diplomático, al menos con seis meses de antelación al final de cualquier año civil que comience una vez transcurrido un plazo de cinco años desde la fecha en que el Convenio entre en vigor. En tal caso, el Convenio dejará de surtir efecto:

- a) con respecto a los impuestos que se perciban por el sistema de retención en la fuente, a las cantidades pagadas a partir del 1 de enero, inclusive, del año natural inmediatamente posterior al de la notificación de la denuncia;
- b) en los restantes casos, el primer día de enero del año civil siguiente a aquel en el que se notifique la denuncia.

En fe de lo cual, los signatarios, debidamente autorizados al efecto, han firmado el presente Convenio.

Hecho en Madrid, el día 9 de octubre del año 2009, en dos originales del mismo tenor en lengua española, siendo ambos textos igualmente auténticos.

Por el Reino de España



Carlos Ocaña Pérez de Tudela  
Secretario de Estado de Hacienda y  
Presupuestos

Por la República Oriental del Uruguay



Álvaro García  
Ministro de Economía y Finanzas

## **Protocolo**

Protocolo relativo al Convenio entre el Reino de España y la República Oriental del Uruguay para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio:

A fin de completar el Convenio para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, el Reino de España y la República Oriental del Uruguay han acordado las siguientes disposiciones, que forman parte de dicho Convenio:

### **I. Ad Artículo 7:**

a) Si una empresa de un Estado Contratante vende bienes o mercancías por medio de un establecimiento permanente en el otro Estado Contratante o ejerce en el mismo una actividad comercial o industrial, los beneficios de dicho establecimiento permanente no se determinarán sobre la base de la suma total obtenida por la empresa sino únicamente sobre la base de la suma imputable a las ventas efectivas o a la actividad comercial o industrial efectiva del establecimiento permanente en cuestión;

b) si una empresa tiene un establecimiento permanente en el otro Estado Contratante, los beneficios obtenidos por dicho establecimiento permanente a través de la contratación, en especial de proyectos, suministros o construcción de equipos o instalaciones industriales, comerciales o científicos, o de contratos públicos no se determinarán sobre la base del precio total del contrato respectivo sino únicamente sobre la base de la parte del contrato que efectivamente sea ejecutada por el establecimiento permanente en el Estado Contratante en el cual esté situado. Los beneficios obtenidos del suministro de mercancías al establecimiento permanente y los beneficios obtenidos con la parte del contrato que se ejecute en el Estado Contratante en el cual se encuentre la sede de la casa matriz de la empresa únicamente podrán someterse a imposición en dicho Estado;

c) las remuneraciones de servicios técnicos, incluidos los estudios o proyectos científicos, geológicos o técnicos, o de contratos de construcción, incluidos los planos correspondientes, o de actividades de asesoramiento o supervisión se considerarán remuneraciones a efectos de la aplicación del Artículo 7 del Convenio.

### **II. Ad al apartado 3 del artículo 12**

Se entiende incluido en la definición de este artículo 12 las cantidades pagadas por el uso o la concesión de uso de nombres, imágenes y demás derechos de la personalidad equiparables.

III. Ad. al artículo 25

Deseosos de facilitar el intercambio de información en fomento del artículo 25 del Convenio, se entenderá que el artículo 25 se aplicará conforme a las siguientes directrices:

A. Definiciones:

A los efectos de este Protocolo, se entenderá que:

- a) la expresión «medidas para recabar información» significa toda disposición de ley y procedimiento administrativo o judicial que permita a un Estado contratante obtener y proporcionar la información solicitada;
- b) el término «información» comprende todo dato, declaración o documento con independencia de su naturaleza;
- c) la expresión «institución de inversión colectiva» significa cualquier vehículo de inversión colectiva, independientemente de su forma jurídica;
- d) el término «notificación» significa la entrega de documentos a residentes de cualquiera de los Estados contratantes conforme a la reglamentación sobre notificaciones vigente en ese Estado.

B. Intercambio de información previo requerimiento:

1. La autoridad competente de un Estado contratante proporcionará, previo requerimiento, información para los fines previstos en el artículo 25. Dicha información se intercambiará independientemente de que la conducta objeto de investigación pudiera constituir un delito penal según las leyes de ese Estado contratante si dicha conducta se hubiera producido en ese Estado.
2. Si la información en posesión de la autoridad competente de un Estado contratante no fuera suficiente para poder dar cumplimiento a un requerimiento de información, ese Estado contratante recurrirá a todas las medidas pertinentes para recabar información con el fin de proporcionar al otro Estado contratante la información solicitada, con independencia de que el Estado contratante mencionado en primer lugar pueda no necesitar dicha información para sus propios fines tributarios.
3. Si así lo solicita expresamente la autoridad competente de un Estado contratante, la autoridad competente del otro Estado contratante proporcionará información en virtud del artículo 25, en la medida permitida por su Derecho interno, en forma de declaraciones de testigos y de copias autenticadas de documentos originales.
4. Cada Estado contratante garantizará que, a los efectos expresados en el artículo 25, sus autoridades competentes están facultadas para obtener y proporcionar, previo requerimiento, información que obre en poder de bancos, otras instituciones financieras, y de cualquier persona que actúe en calidad representativa o fiduciaria, incluidos los agentes designados y fiduciarios.

5. Cada Estado contratante recurrirá a todas las medidas pertinentes para obtener y proporcionar, a los efectos expresados en el artículo 25, previo requerimiento:

- a) información relativa a la propiedad, legal y efectiva, de sociedades de capital, sociedades de personas, fideicomisos, fundaciones y otras personas, incluida, con las limitaciones establecidas en el artículo 1 del Convenio, la información sobre propiedad respecto de todas las personas que componen una cadena de propiedad, incluyendo, en el caso de instituciones de inversión colectiva, información sobre participaciones, acciones y otras unidades;
- b) en el caso de fideicomisos, información sobre los fideicomitentes, fiduciarios y beneficiarios;
- c) y en el caso de fundaciones, información sobre los fundadores, los miembros del consejo de la fundación y los beneficiarios.

6. La autoridad competente de un Estado contratante enviará la información solicitada tan pronto como sea posible al otro Estado contratante. Para garantizar la rapidez en la respuesta, la autoridad competente del Estado contratante mencionado en primer lugar:

- a) Acusará recibo del requerimiento por escrito a la autoridad competente del otro Estado contratante a más tardar, en el plazo de quince días corridos o naturales, a contar desde su recepción.
- b) Notificará, en su caso, a la autoridad competente del otro Estado contratante los defectos que hubiera en el requerimiento en el plazo de sesenta días a partir del acuse de recibo.
- c) Si la autoridad competente del Estado contratante mencionado en primer lugar no hubiera podido obtener y proporcionar la información en el plazo de noventa días a partir del acuse de recibo, informará inmediatamente al otro Estado contratante, explicando las razones de esa imposibilidad, la índole de los obstáculos o los motivos de su negativa. El otro Estado contratante decidirá entonces si anular o no su requerimiento. Si decidiera no anularlo, los Estados contratantes, informal y directamente, mediante un Acuerdo amistoso o de otro modo, analizarán las posibilidades de alcanzar el objeto del requerimiento, y se consultarán entre sí el modo de lograr tal objetivo.
- d) Proporcionar la información a más tardar, en el plazo de seis meses a partir del acuse de recibo. En determinados casos que revistan especial complejidad, las autoridades competentes podrán acordar plazos más largos.

Las restricciones temporales mencionadas en el presente artículo no afectan en modo alguno la validez y legalidad de la información intercambiada en virtud del presente Convenio.

7. Las autoridades competentes de los Estados contratantes determinarán de mutuo acuerdo el modo de remisión de los requerimientos de información al Estado requerido y en caso de ejercer la delegación, comunicarán cual es el organismo encargado de realizar el intercambio de información.

C. Posibilidad de denegar un requerimiento:

1. Las disposiciones del presente Convenio no impondrán a un Estado contratante la obligación de obtener o proporcionar información que pudiera revelar comunicaciones confidenciales entre un cliente y un abogado u otro representante legal reconocido, cuando dichas comunicaciones:

- a) se produzcan con el fin de recabar o prestar asesoramiento jurídico, o
- b) se produzcan a efectos de su utilización en un procedimiento jurídico en curso o previsto.

2. Un Estado contratante podrá denegar un requerimiento de información si el otro Estado contratante la solicita para administrar o hacer cumplir una disposición de su derecho tributario, o cualquier requisito relacionado con ella, que resulte discriminatoria contra un nacional del Estado contratante mencionado en primer lugar en comparación con un nacional del otro Estado contratante en las mismas circunstancias.

D. Requerimientos de notificación.

Se entenderá que la cooperación entre ambos Estados contratantes incluye la asistencia en la notificación enmarcada en las siguientes disposiciones:

1. Las autoridades de un Estado contratante, a petición de las autoridades competentes del otro Estado contratante, y de conformidad con las leyes que gobiernan la notificación de tales instrumentos en el Estado contratante mencionado en primer lugar, notificarán, cuando sea posible, las resoluciones y cualquier otro instrumento que emitan las autoridades administrativas del otro Estado contratante que guarden relación con la aplicación de los impuestos de cualquier naturaleza y denominación exigibles por los Estados contratantes.

2. Con la emisión del requerimiento de notificación, y si disponen de tales datos, las autoridades competentes de un Estado contratante informarán a las autoridades competentes del otro Estado contratante del nombre, lugar de domicilio y cualquier otro dato pertinente del destinatario.

3. Las autoridades competentes de un Estado contratante acusarán recibo del requerimiento por escrito a las autoridades competentes del otro Estado contratante y les notificarán cualquier posible defecto del requerimiento.

4. Las autoridades competentes de los Estados contratantes podrán establecer de mutuo acuerdo el canal de remisión de los requerimientos de notificación.

E. Idioma.

Los requerimientos y las respuestas a los mismos se redactarán en la lengua española.

#### IV. Limitación de beneficios

1. No se aplicará el convenio a las sociedades o entidades acogidas a alguno de los siguientes regímenes:

- a) Sociedades Anónimas Financieras de Inversión (SAFI), cuando continúen disfrutando del régimen fiscal previsto en la Ley nº 11.073, de 24 de junio de 1948, o sus modificaciones posteriores;
- b) Instituciones Financieras Externas (IFE), cuando continúen disfrutando del régimen fiscal previsto en el Decreto de 17 de agosto de 1989 o sus modificaciones posteriores;
- c) Zonas francas previstas en la Ley 15.921 o sus modificaciones posteriores, en lo referente a la prestación de servicios financieros.

Lo dispuesto en los apartados a) y b) no será de aplicación cuando Uruguay esté en disposición de intercambiar información con respecto a esas entidades en los términos previstos en este Convenio.

2.

a) El presente Convenio se interpretará de forma que no impida a un Estado contratante aplicar su normativa interna para evitar la evasión y fraude fiscal.

b) Los Estados contratantes declaran que sus normas y procedimientos de Derecho interno respecto a los abusos de la norma (comprendidos los convenios fiscales) son aplicables para combatir tales abusos.

c) El presente Convenio no impedirá a los Estados contratantes la aplicación de sus normas internas relativas a la transparencia fiscal internacional.

d) Las disposiciones de los artículos 10, 11 y 12 no se aplican cuando el fin primordial o uno de los fines primordiales de cualquier persona relacionada con la creación o cesión de las acciones u otros derechos que generan los dividendos, la creación o cesión del crédito que genera los intereses, la creación o cesión del derecho que genera los cánones o regalías, sea el de conseguir el beneficio de dichos artículos mediante dicha creación o cesión.

#### V. En relación con la correcta aplicación del Convenio

a) Para poder aplicar el presente Convenio los Estados Contratantes emitirán certificados de residencia "a efectos de la aplicación" de este Convenio a sus residentes. Estos certificados acreditarán que la persona esta sujeta a los impuestos establecidos en la norma interna de ese Estado. Las autoridades habilitadas para la emisión de los certificados de residencia serán:

En el caso de España: la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

En el caso de Uruguay: el Ministerio de Economía y Finanzas o el organismo en quien se delegue la función.

En caso de que en un Estado contratante se modifiquen los procedimientos o la autoridad emisora de estos certificados de residencia, este Estado lo comunicará al otro Estado contratante conforme a lo previsto en el apartado 3 del artículo 24 de este Convenio.

b) En el caso de Uruguay, en relación con los pagos realizados a residentes en España, en el momento de la deducibilidad del gasto en Uruguay se considerará acreditado el pago de impuestos en España mediante la presentación del certificado de residencia mencionado en el apartado anterior.

En fe de lo cual, los signatarios, debidamente autorizados al efecto, han firmado el presente Protocolo.

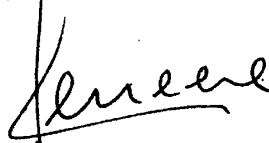
Hecho en Madrid, el día 9 de octubre del año 2009, en dos originales del mismo tenor en lengua española, siendo ambos textos igualmente auténticos.

Por el Reino de España



Carlos Ocaña Pérez de Tudela  
Secretario de Estado de Hacienda  
y Presupuestos

Por la República Oriental del Uruguay



Alvaro García  
Ministro de Economía y Finanzas





[TRANSLATION – TRADUCTION]

CONVENTION ENTRE LE ROYAUME D'ESPAGNE ET LA RÉPUBLIQUE  
ORIENTALE DE L'URUGUAY TENDANT À ÉVITER LA DOUBLE IM-  
POSITION ET À PRÉVENIR L'ÉVASION FISCALE EN MATIÈRE D'IM-  
PÔTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE

Le Royaume d'Espagne et la République orientale de l'Uruguay, désireux de conclure une convention tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, sont convenus de ce qui suit :

CHAPITRE PREMIER. CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION

*Article premier. Personnes visées*

La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents de l'un des États contractants ou des deux.

*Article 2. Impôts visés*

1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune exigibles par chacun des États contractants, ses subdivisions politiques et ses collectivités locales, quel qu'en soit le régime de perception.

2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et la fortune tous prélèvements fiscaux assis sur tout ou partie du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens meubles ou immeubles, les impôts sur le montant des traitements ou salaires versés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.

3. Les impôts auxquels s'applique la présente Convention sont, notamment :

- a) En Espagne :
  - i) L'impôt sur le revenu des personnes physiques;
  - ii) L'impôt sur les sociétés;
  - iii) L'impôt sur le revenu des non-résidents;
  - iv) L'impôt sur la fortune; et
  - v) Les impôts locaux sur le revenu et sur la fortune (dénommés ci-après « l'impôt espagnol »)
- b) En Uruguay :
  - i) L'impôt sur le revenu des activités économiques (IRAE);
  - ii) L'impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPF);
  - iii) L'impôt sur les revenus des non-résidents (IRNR);

- iv) L'impôt d'assistance à la sécurité sociale (IASS); et
  - v) L'impôt sur la fortune (IP)
- (dénommés ci-après « l'impôt uruguayen »).

4. La présente Convention s'appliquera également aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après sa signature et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou les remplaceraient. Les autorités compétentes des États contractants se communiqueront mutuellement les modifications significatives qui auront été apportées à leurs législations fiscales respectives.

## CHAPITRE II. DEFINITIONS

### *Article 3. Définitions générales*

1. Aux fins de la présente Convention, à moins que son texte n'impose une interprétation différente :

a) Le terme « Espagne » désigne le Royaume d'Espagne et, pris au sens géographique, le territoire du Royaume d'Espagne, y compris l'espace aérien, ses eaux intérieures, la mer territoriale et toute zone située en dehors de la mer territoriale sur laquelle, conformément au droit international et au droit national, le Royaume d'Espagne exerce ou pourra exercer par la suite sa juridiction ou ses droits souverains en ce qui concerne le fond marin, son sous-sol, les eaux surjacentes et leurs ressources naturelles;

b) Le terme « Uruguay » désigne la République orientale de l'Uruguay et, pris au sens géographique, le territoire sur lequel la législation fiscale est applicable, y compris l'espace aérien, les zones maritimes, toute zone située sous juridiction uruguayenne ou sur lesquelles, la République orientale de l'Uruguay exerce ou pourra exercer par la suite ses droits souverains, conformément au droit international et à sa législation nationale.

c) Les expressions « l'un des États contractants » et « l'autre État contractant » désignent, selon le contexte, l'Espagne ou l'Uruguay;

d) Le terme « personne » s'entend des personnes physiques, des sociétés et de tout autre groupe de personnes.

e) Le terme « société » désigne toute personne morale ou tout sujet de droit considéré comme une personne morale aux fins de l'imposition.

f) Le terme « entreprise » s'applique à la réalisation de toute activité économique, quelle qu'elle soit.

g) Les expressions « entreprise d'un État contractant » et « entreprise de l'autre État contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre État contractant.

h) L'expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effectif est situé dans un État contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre État contractant.

i) L'expression « autorité compétente » signifie :

(i) En Espagne : le Ministre de l'économie et des finances ou son représentant autorisé;

(ii) En Uruguay : le Ministère de l'économie et des finances, ses représentants ou l'autorité à laquelle il a délégué ses attributions;

j) Le terme « national » désigne :

(i) Une personne physique qui possède la nationalité ou est citoyenne d'un des États contractants;

(ii) Une personne morale, une société de personnes ou une association constituée conformément à la législation en vigueur dans un État contractant.

k) L'expression « activité économique » comprend la prestation de services professionnels ainsi que toute autre activité de caractère indépendant.

2. Pour l'application de la Convention à tout moment par un État contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini aura le sens que lui confère à ce moment le droit de cet État concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'appelle une interprétation différente. Le sens attribué par la législation fiscale prévaudra sur celui issu d'autres branches du droit de cet État.

#### *Article 4. Résidence*

1. Au sens de la présente Convention, l'expression « Résident d'un État contractant » s'entend de toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l'impôt en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue; cela comprend également cet État et ses subdivisions politiques ou ses collectivités locales. Cette expression ne prend toutefois pas en compte les personnes assujetties à l'impôt dans ledit État uniquement en raison des revenus qu'elles tirent de sources situées dans cet État ou des capitaux qu'elles possèdent dans celui-ci.

2. Lorsque, en vertu des dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :

a) Cette personne est considérée comme un résident uniquement de l'État contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux États contractants, elle est considérée uniquement comme un résident de l'État contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);

b) Si l'État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des États, elle est considérée uniquement comme un résident de l'État contractant où elle séjourne de façon habituelle;

c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident uniquement de l'État dont elle possède la nationalité;

d) Si cette personne possède la nationalité des deux États ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des États tranchent la question d'un commun accord.

3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux États contractants, elle est considérée comme un résident uniquement de l'État dans lequel se trouve le siège de sa direction effective.

#### *Article 5. Établissement stable*

1. Au sens de la présente Convention, l'expression « établissement stable » s'entend d'une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

2. L'expression « établissement stable » comprend notamment

- a) Les sièges de direction;
- b) Les succursales;
- c) Les bureaux;
- d) Les usines;
- e) Les ateliers et
- f) Les mines, les puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre site d'extraction de ressources naturelles.

3. Un chantier ou un projet de construction, d'installation ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée est supérieure à 9 mois.

4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, il est considéré que l'expression « établissement stable » ne comprend pas :

- a) L'usage d'installations aux seules fins de stockage ou d'exposition de biens ou marchandises appartenant à l'entreprise;
- b) Le maintien d'un dépôt de biens ou marchandises appartenant à l'entreprise à seule fin de les stocker, les exposer ou de les livrer;
- c) Le maintien d'un dépôt de biens ou marchandises appartenant à l'entreprise à seule fin de transformation par une autre entreprise;
- d) Le maintien d'une installation fixe d'affaires à seule fin d'acheter des biens ou des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise;
- e) Le maintien d'une installation fixe d'affaires à seule fin d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère auxiliaire ou préparatoire;
- f) Le maintien d'une installation fixe d'affaires à seule fin d'y exercer une combinaison des activités visées aux alinéas a) à e), pourvu que l'ensemble de l'activité de l'installation fixe d'affaires conserve son caractère auxiliaire ou préparatoire.

5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6, agit au nom d'une entreprise et dispose dans un État contractant d'un pouvoir, qu'elle exerce habituellement, de conclure des contrats au nom de cette entreprise, cette entreprise est réputée posséder un établissement stable dans cet État pour toutes les activités que cette

personne exerce au nom de ladite entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 du présent article qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation fixe d'affaires comme un établissement stable au sens des dispositions de ce paragraphe-là.

6. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un État contractant du seul fait qu'elle exerce une activité dans cet autre État par l'intermédiaire d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent indépendant, si ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leurs activités.

7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un État contractant contrôle ou soit contrôlée par une société qui est résident de l'autre État contractant ou qui y exerce ses activités économiques (que ce soit ou non par l'intermédiaire d'un établissement stable) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.

### CHAPITRE III. IMPOTS SUR LES REVENUS

#### *Article 6. Revenus immobiliers*

1. Les revenus tirés par un résident d'un État contractant de biens immeubles (y compris ceux provenant d'exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

2. L'expression « biens immeubles » s'entend au sens que lui donne le droit de l'État où ces biens sont situés. Elle comprend en tous cas les biens accessoires aux biens immeubles, le cheptel et le matériel servant aux exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immeubles et les droits à des paiements variables ou fixes en contrepartie de l'exploitation ou de la concession de l'exploitation de gisements miniers, de sources et d'autres ressources naturelles; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immeubles.

3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus tirés de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage ou de toute autre forme d'exploitation de biens immeubles.

4. Lorsque la propriété d'actions ou d'autres droits habilite directement ou indirectement le propriétaire desdites actions ou desdits droits au droit à la jouissance des biens immeubles, le revenu tiré de l'utilisation directe, de la location ou de l'usage sous une forme quelconque dudit droit de jouissance est imposable dans l'État contractant dans lequel les biens immeubles sont situés.

5. Les dispositions des paragraphes 1, 3 et 4 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise.

*Article 7. Bénéfices des entreprises*

1. Les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'entreprise n'exerce une activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre État, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.

2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un État contractant exerce une activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues, dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.

3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, que ceux-ci soient réalisés dans l'État contractant où est situé l'établissement stable ou ailleurs.

4. Nul bénéfice ne peut être imputé à un établissement stable pour le motif que cet établissement stable a uniquement acheté des biens ou des marchandises pour le compte de l'entreprise.

5. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à un établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.

6. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions desdits articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

*Article 8. Transport maritime et aérien*

1. Les bénéfices tirés de l'exploitation en trafic international de navires ou d'aéronefs sont imposables exclusivement dans l'État où se trouve le siège de la direction effective de l'entreprise.

2. Au sens du présent Article, l'expression « bénéfices tirés de l'exploitation en trafic international de navires ou d'aéronefs » comprend également les bénéfices tirés occasionnellement de :

a) La location de navires ou d'aéronefs coque nue et

b) L'utilisation ou la location de conteneurs (y compris les remorques et le matériel correspondant destiné au transport des conteneurs),

pour autant que ces activités fassent partie de l'exploitation en trafic international de navires ou d'aéronefs.

3. Si le siège de la direction effective d'une entreprise de transport maritime est établi à bord d'un navire ou d'un bateau ce siège est considéré comme sis dans l'État con-

tractant où se trouve le port d'attache de ce navire ou de ce bateau ou, à défaut de port d'attache, dans l'État contractant dont l'exploitant du navire est résident.

4. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent également aux bénéficiaires tirés de la participation à un « pool », à une exploitation en commun ou à un organisme d'exploitation internationale.

#### *Article 9. Entreprises associées*

1. Lorsque :

a) Une entreprise d'un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre État contractant; ou que

b) Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un État contractant et d'une entreprise de l'autre État contractant,

et que, dans l'un ou l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéficiaires qui, n'étaient ces conditions, auraient été réalisés par l'une de ces entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

2. Lorsqu'un État contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet État — et impose en conséquence — des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre État a été imposée dans cet autre État contractant, et que cet autre État reconnaît que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier État si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, cet autre État procède à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la Convention et, le cas échéant, les autorités compétentes des États contractants se consulteront.

#### *Article 10. Dividendes*

1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident et selon la législation de cet État, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 5 % du montant brut des dividendes.

Nonobstant les dispositions du paragraphe antérieur, l'État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident considère comme exonérés d'impôts les dividendes payés par cette société à une société dont le capital est, en totalité ou en partie, réparti en actions ou en parts sociales et qui est résidente de l'autre État contractant, pour autant qu'elle possède directement au moins 75 % du capital de la société qui paie les dividendes.

Ces deux derniers paragraphes n'affectent pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

3. Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions ou de bons de jouissance, d'actions minières, de parts de fondateurs ou d'autres droits qui permettent une participation aux bénéfices, à l'exception des créances, ainsi que les revenus soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions ou de participations sociales par la législation de l'État dont la société distributrice est un résident.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, une activité économique par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et que la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à cet établissement stable. Les dispositions applicables en pareil cas sont celles de l'article 7.

5. Lorsqu'une société qui est un résident d'un État contractant reçoit des bénéfices ou des revenus provenant de l'autre État contractant, cet autre État contractant ne peut prélever aucun impôt sur les dividendes versés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État contractant ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable situé dans cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.

6. Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, lorsqu'une société qui est résident d'un État contractant possède un établissement stable dans l'autre État contractant, cet autre État contractant pourra imposer les recettes, ou ce qui est considéré comme telles, transférées par l'établissement stable à la société résidente du premier État contractant, mais l'impôt ainsi exigé ne pourra pas dépasser 0 % du montant brut.

#### *Article 11. Intérêts*

1. Les intérêts provenant de l'un des États contractants et payés à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

2. Toutefois, ces intérêts sont également imposables dans l'État contractant d'où ils proviennent et conformément à la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est résident de l'autre État contractant, l'impôt ne peut excéder 10 % du montant brut des intérêts.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts provenant de l'un des États contractants et payés à un résident de l'autre État contractant sont imposables exclusivement dans cet autre État si le perceuteur en est le bénéficiaire effectif et :

a) Est l'État lui-même ou la banque centrale, une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales;

b) La personne qui paye les intérêts est l'État d'où ils proviennent ou une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales;



c) Les intérêts sont payés en raison d'un prêt ou d'une créance échue, concédée, accordée, garantie ou assurée par cet État, l'une de ses subdivisions politiques, collectivités locales ou un organisme de crédit à l'exportation;

d) Est une institution financière pour un prêt d'une durée égale ou supérieure à trois (3) ans destiné à financer des projets d'investissement;

e) Les intérêts sont payés suite à une dette issue de la vente à crédit de matériel, de marchandises ou de services quels qu'ils soient;

f) Est un fonds de pension approuvé par cet État à des fins fiscales et le revenu de ce fonds est, en termes généraux, exonéré d'impôts dans cet État.

4. Le terme "intérêts" au sens du présent article désigne le produit des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur et plus particulièrement les revenus de valeurs publiques et les revenus de bons ou d'obligations d'emprunts, y compris des primes et des lots attachés à ces titres, ainsi que tous autres revenus assimilés au même régime que les revenus de capitaux prêtés, par la législation fiscale de l'État d'où proviennent ces revenus. Les amendes pour retard de paiement ne sont pas considérées comme des intérêts aux termes du présent article. Le terme « intérêts » ne comprend pas les revenus considérés comme des dividendes au sens de l'article 10.

5. Les dispositions des paragraphes 1 à 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où proviennent les intérêts une activité économique par l'intermédiaire d'un établissement stable qui est situé dans cet autre État et que la créance génératrice des intérêts se rattache effectivement à cet établissement stable. En pareil cas, les dispositions de l'article 7 seront applicables.

6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable avec lequel a été contractée la dette qui est à l'origine du paiement des intérêts et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'État où l'établissement stable est situé.

7. Lorsque, en raison des relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif, ou que l'un et l'autre entretiennent avec des tierces personnes, le montant des intérêts payés, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant, compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

#### *Article 12. Redevances*

1. Les redevances provenant d'un État contractant et payées à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'État contractant d'où elles proviennent et conformément à la législation de cet État, mais si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder :

a) 5 % du montant brut des redevances payées dans le cas des droits d'auteur sur des œuvres littéraires, artistiques ou scientifiques;

b) 10 % du montant brut des redevances dans les autres cas.

3. Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les sommes de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage de droits d'auteur, y compris les films cinématographiques, ou les pellicules, bandes ou autres moyens de reproduction d'images et de sons, de brevets, de marques de fabrique ou de commerce, de dessins ou de modèles, de plans, de formules ou de procédés secrets, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à des expériences acquises dans le domaine industriel, commercial et scientifique.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, réside d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où proviennent les redevances une activité économique, par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé et que le droit ou le bien générateur des redevances se rattache effectivement à cet établissement stable. En pareil cas, les dispositions de l'article 7 seront applicables.

5. Aux fins du présent article, les redevances sont considérées comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable en relation avec lequel a été contractée l'obligation de paiement des redevances et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'État où l'établissement stable est situé.

6. Lorsque, en raison des relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif des redevances, ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de l'usage, du droit ou des informations pour lesquels elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur ou le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire reste imposable selon la législation de chaque État contractant, compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

### *Article 13. Gains en capital*

1. Les revenus ou les gains qu'un résident d'un État contractant tire de l'aliénation de biens immeubles, tels que définis à l'article 6, situés dans l'autre État contractant, sont imposables dans cet autre État contractant

2. Les gains tirés de l'aliénation de biens meubles qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant possède dans l'autre État contractant, y compris les gains tirés de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) sont imposables dans l'autre État contractant.

3. Les gains tirés de l'aliénation de navires ou d'aéronefs exploités en trafic international ou de celle de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans l'État contractant où le siège de la direction effective de l'entreprise est situé.

*Article 15. Participations des membres des conseils*

Les participations et autres rétributions similaires qu'un résident de l'un des États contractants perçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou du personnel de direction d'une société résidente de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

*Article 16. Artistes et sportifs*

1. Nonobstant les dispositions des articles 7 et 14, les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de ses activités exercées à titre personnel dans l'autre État contractant en tant qu'artiste du spectacle, acteur de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou comme musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre État.

2. Nonobstant les dispositions des articles 7 et 14, lorsque les revenus tirés d'activités qu'un artiste ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables dans l'État contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.

3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, les revenus perçus par un artiste ou un sportif seront exonérés d'impôts dans l'État contractant où se déroulent ces activités lorsqu'elles sont financées au moins à 50 % par des fonds publics de l'un ou des deux États et qu'elles s'effectuent dans le cadre d'un accord de collaboration culturelle entre les États contractants.

*Article 17. Pensions*

Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 de l'article 18, les pensions de retraite et autres rémunérations similaires payées à un résident d'un État contractant au titre d'un emploi salarié antérieur ne sont imposables que dans cet État.

*Article 18. Rémunérations de fonctions publiques*

1.

a) Les salaires, traitements et autres rémunérations payés par un État contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique au titre de services fournis à cet État ou à cette subdivision ou collectivité ne sont imposables que dans cet État.

b) Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations analogues ne sont imposables que dans l'autre État contractant si les services sont fournis dans cet État et si la personne physique est un résident de cet État qui :

(i) Est un ressortissant de cet État, ou  
(if) N'a pas acquis la condition de résident de cet État à la seule fin de rendre les services.

2.

a) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres rémunérations analogues payées par un État contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, que ce soit directement ou par le biais de fonds constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou collectivité sont imposables exclusivement dans cet État,.

b) Toutefois, ces pensions et autres rémunérations analogues sont imposables exclusivement dans l'autre État contractant si la personne physique est un résident et un ressortissant de cet État.

3. Les dispositions des articles 14, 15, 16 et 17 s'appliquent aux salaires, traitements, pensions et rémunérations versés au titre de services rendus dans le cadre d'activités économiques exercées par un État contractant ou par une de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales.

#### *Article 19. Étudiants*

Tout étudiant ou apprenti qui séjourne dans l'un des États contractants à seule fin d'y poursuivre des études ou d'y acquérir une formation et qui est résident de l'autre État contractant ou qui, immédiatement avant son séjour, était résident de cet autre État, est exonéré d'impôt dans le premier État en ce qui concerne les sommes qu'il reçoit en vue de son entretien, de ses études ou de sa formation, à condition que lesdites sommes proviennent de sources situées en dehors de cet État.

#### *Article 20. Autres revenus*

1. Les éléments du revenu d'un résident d'un État contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas visés par les articles précédents de la présente Convention sont imposables exclusivement dans cet État.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus, autres que ceux de biens immeubles tels que définis au paragraphe 2 de l'article 6, si le bénéficiaire desdits revenus, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant une activité économique par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et que le droit ou le bien générateur de revenus se rattache effectivement à cet établissement stable. Les dispositions applicables en pareil cas sont celles de l'article 7.

CHAPITRE IV. IMPOSITION DE LA FORTUNE

*Article 21. Fortune*

1. La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l'article 6, qui sont la propriété d'un résident d'un État contractant et qui sont situés dans l'autre État contractant, est imposable dans cet autre État.

2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant, est imposable dans cet autre État contractant.

3. La fortune constituée par des navires ou des aéronefs exploités en trafic international ainsi que par des biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires et aéronefs, n'est imposable que dans l'État contractant où est situé le siège de direction effective de l'entreprise.

4. La fortune constituée par des actions ou d'autres droits dans une société ou dans tout autre type de personne morale, quel qu'il soit, dont la valeur provient pour plus de 50 %, directement ou indirectement, de biens immeubles situés dans un État contractant ou par des actions ou d'autres droits qui octroient à leur détenteur le droit de jouissance de biens immeubles situés dans un État contractant, sont imposables dans l'État contractant dans lequel le bien immeuble est situé.

5. Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État.

CHAPITRE V. METHODES POUR ELIMINER LA DOUBLE IMPOSITION

*Article 22. Élimination de la double imposition*

1. En Espagne, la double imposition sera évitée, soit conformément aux dispositions pertinentes de la législation espagnole, soit conformément aux dispositions suivantes, soumises à la législation nationale de l'Espagne :

a) Lorsqu'un résident de l'Espagne tire un revenu ou possède des éléments de fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, peuvent être imposés en Uruguay, l'Espagne autorisera :

i) La déduction de l'impôt sur le revenu de ce résident pour un montant égal à l'impôt sur le revenu payé en Uruguay;

ii) La déduction de l'impôt sur la fortune de ce résident pour un montant égal à l'impôt payé en Uruguay pour ces éléments de la fortune;

iii) La déduction de l'impôt sur les sociétés effectivement payé par la société distributrice des dividendes correspondant aux bénéfices utilisés pour le paiement desdits dividendes, conformément à la législation interne.

Toutefois, ladite déduction ne peut pas dépasser la partie de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur la fortune, tels que calculés avant la déduction correspondant aux revenus ou aux éléments de la fortune imposables en Uruguay.

b) Lorsque, conformément à une disposition quelconque de la présente Convention, les revenus perçus par un résident de l'Espagne ou la fortune qu'il possède sont exonérés d'impôt en Espagne, l'Espagne peut néanmoins tenir compte des revenus ou de la fortune exonérés, pour le calcul du montant de l'impôt sur le revenu ou sur la fortune restant dudit résident.

2. En Uruguay, la double imposition sera évitée, soit conformément aux dispositions pertinentes de sa législation nationale, soit conformément aux dispositions suivantes :

a) Lorsqu'un résident de l'Uruguay tire un revenu ou possède des éléments de fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, peuvent être imposés en Espagne, l'Uruguay autorisera :

i) La détermination de l'impôt correspondant en déduisant de l'impôt sur le revenu qui doit être payé en Uruguay pour les revenus provenant d'Espagne, conformément aux lois uruguayennes, l'impôt versé au fisc espagnol en vertu du droit espagnol.

ii) La déduction de l'impôt sur la fortune de ce résident pour un montant égal à l'impôt payé en Espagne pour ces éléments de fortune;

iii) La déduction de l'impôt sur les sociétés effectivement payé par la société distributrice de dividendes correspondant aux bénéfices utilisés pour le paiement desdits dividendes, conformément à sa législation interne.

Toutefois, le montant de la déduction ne peut pas dépasser la partie de l'impôt uruguayen correspondant auxdits revenus ou auxdits biens avant la déduction.

b) Lorsque, conformément à une disposition quelconque de la présente Convention, les revenus perçus par un résident de l'Uruguay ou la fortune qu'il possède sont exempts d'impôt en Uruguay, l'Uruguay peut toutefois prendre en considération les revenus ou la fortune exonérés pour le calcul du montant de l'impôt sur le revenu ou sur la fortune restant dudit résident.

## CHAPITRE VI. DISPOSITIONS SPECIALES

### *Article 23. Égalité de traitement*

1. Les nationaux d'un État contractant ne sont assujettis dans l'autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou peuvent être assujettis les nationaux de cet autre État qui se trouvent dans la même situation, en particulier pour ce qui concerne la résidence. Nonobstant les dispositions de l'article premier, la présente disposition s'applique également aux personnes qui ne sont résidentes ni de l'un ni de l'autre État contractant.

2. Les établissements stables qu'une entreprise d'un État contractant exploite dans l'autre État contractant ne seront pas imposés dans cet État d'une façon moins favorable que les entreprises de cet autre État qui exercent les mêmes activités. La présente disposition ne pourra pas être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l'autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt qu'il accorde à ses propres résidents en fonction de leur état civil ou de leurs charges de famille.

3. A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 9, du paragraphe 7 de l'article 11 ou du paragraphe 6 de l'article 12 ne s'appliquent, les intérêts, redevances ou autres frais payés par une entreprise d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier État. De même, les dettes d'une entreprise d'un État contractant contractées envers un résident de l'autre État contractant seront déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier État.

4. Les entreprises d'un État contractant dont le capital est, en totalité ou en partie, directement ou indirectement détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre État contractant, ne sont soumises dans le premier État à aucune imposition ou obligation y relative qui soit autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier État.

5. Nonobstant les dispositions de l'article 2, les dispositions du présent article s'appliquent à tous les impôts, quelle que soit leur nature ou leur dénomination.

#### *Article 24. Procédure amiable*

1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un ou par les deux États contractants entraînent ou peuvent entraîner pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'État contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 23, à celle de l'État contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans un délai de trois ans à partir de la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.

2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre État contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la présente Convention. L'accord est applicable quels que soient les délais prévus par le droit interne des États contractants.

3. Les autorités compétentes des États contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.

4. Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes

précédents. Lorsque cela sera jugé souhaitable pour parvenir à cet accord, les représentants des autorités compétentes des États contractants pourront se réunir au sein d'une commission pour procéder à un échange de vues.

*Article 25. Échange de renseignements*

1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements qui peuvent s'avérer intéressants pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour la gestion ou l'application du droit interne relatif aux impôts de toute nature et de toute dénomination, exigés par les États contractants, leurs subdivisions politiques ou collectivités locales, dans la mesure où l'imposition prévue par cette législation n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par les articles 1 et 2.

2. Les renseignements reçus par un État contractant en vertu des dispositions du paragraphe 1 sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernés par l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par le paragraphe 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent en faire état au cours des audiences publiques de tribunaux ou dans les jugements.

Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un État contractant pourront être utilisés à d'autres fins, lorsque cette utilisation est autorisée par la législation de l'État qui fournit les renseignements.

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l'obligation :

a) De prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation ou à sa pratique administrative ou à celles de l'autre État contractant;

b) De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre État contractant; et

c) De fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel ou professionnel ou un procédé industriel ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.

4. Lorsqu'un État contractant demande des renseignements conformément aux dispositions du présent article, l'autre État contractant utilisera toutes les mesures dont il dispose pour obtenir les informations demandées, même si cet autre État peut ne pas avoir besoin de ces renseignements à ses propres fins fiscales. L'obligation précédente est restreinte par les dispositions du paragraphe 3, sauf lorsque ces restrictions empêcheraient un État contractant de fournir des renseignements uniquement par manque d'intérêt national pour ceux-ci.

5. Les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme autorisant un État contractant à refuser de fournir des informations uniquement parce que ces renseignements sont en possession de banques, d'autres institutions finan-



cières ou de toute personne agissant en qualité de représentant ou fiduciaire ou parce qu'ils sont liés aux droits de propriété d'une personne.

*Article 26. Assistance pour le recouvrement*

1. Les États contractants se prêteront mutuellement assistance pour le recouvrement de leurs crédits fiscaux. Cette assistance n'est pas restreinte par les articles 1 et 2. Les autorités compétentes des États contractants pourront fixer d'un commun accord les modalités d'application du présent article.

2. L'expression "créance fiscale" au sens du présent article, signifie tout montant dû pour le concept d'impôts de toute nature et de toute dénomination, exigés par les États contractants, leurs subdivisions politiques ou collectivités locales, dans la mesure où l'imposition prévue n'est pas contraire à la Convention ni à tout autre instrument dont les États contractants sont parties. L'expression comprend également les intérêts, les sanctions administratives, les frais de recouvrement ou de prise de mesures de prévention liées audit montant.

3. Lorsqu'une créance fiscale d'un État contractant est exigible en vertu du droit de cet État et que le créancier est une personne qui, conformément au droit de cet État ne peut pas empêcher à ce moment le recouvrement, à la demande des autorités compétentes de cet État, les autorités compétentes de l'autre État contractant accepteront de recouvrer cette créance fiscale. Cet autre État encaissera la créance fiscale conformément aux dispositions de sa législation relative à l'application et au recouvrement de ses propres impôts, comme s'il s'agissait de sa propre créance fiscale.

4. Lorsqu'une créance fiscale d'un État contractant est d'une nature telle que cet État peut, en vertu de sa législation interne, adopter des mesures préventives qui garantissent son recouvrement, les autorités compétentes de l'autre État contractant accepteront ladite créance fiscale, à la demande des autorités compétentes du premier État, en vue d'adopter lesdites mesures préventives, conformément aux dispositions de sa propre législation, comme s'il s'agissait de sa propre créance fiscale, même si, au moment de l'application desdites mesures préventives, la créance fiscale n'est pas exigible dans le premier pays ou si son créancier est une personne ayant le droit d'empêcher son recouvrement.

5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 3 et 4, une créance fiscale acceptée par un État contractant aux termes desdits paragraphes, ne sera pas soumise dans cet État, conformément à son droit interne et de par sa nature, à la prescription ou au droit de préemption applicable aux créances fiscales. De même, une créance fiscale acceptée par un État contractant aux termes des paragraphes 3 ou 4 ne jouira pas dans cet État des privilèges applicables aux créances fiscales en vertu du droit de l'autre État contractant.

6. Les procédures relatives à l'existence, à la validité ou au montant de la créance fiscale ne sont pas recevables devant les tribunaux ou les organes administratifs de l'autre État contractant.

7. Si, à un moment postérieur à la demande de recouvrement émise par un État contractant en vertu des dispositions des paragraphes 3 ou 4, mais avant son recouvrement et sa remise par l'autre État contractant, la créance fiscale cesse d'être

a) Dans le cas d'une demande présentée en vertu des dispositions du paragraphe 3, une créance exigible conformément au droit interne du premier État et dont le débiteur est une personne qui, à ce moment et selon le droit de cet État, ne peut pas empêcher son recouvrement, ou

b) Dans le cas d'une demande présentée en vertu des dispositions du paragraphe 4, une créance au sujet de laquelle, conformément au droit interne du premier État, il serait possible d'adopter des mesures de prévention en vue de garantir son recouvrement.

Les autorités compétentes du premier État notifieront ce fait sans tarder aux autorités compétentes de l'autre État et, selon la décision de cet autre État, le premier État interrompra ou retirera sa demande.

8. En aucun cas les dispositions du présent article ne pourront être interprétées comme imposant à un État contractant l'obligation :

a) De prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation ou à sa pratique administrative ou à celles de l'autre État contractant;

b) De prendre des mesures contraires à l'ordre public;

c) De fournir une assistance lorsque l'autre État contractant n'a pas appliqué toutes les mesures de prévention ou pour le recouvrement, selon le cas, dont il dispose conformément à sa législation ou à sa pratique administrative;

d) De fournir une assistance dans les cas où le fardeau administratif pour cet État est clairement disproportionné par rapport aux avantages que va en tirer l'autre État contractant.

#### *Article 27.*

##### Membres de missions diplomatiques et de postes consulaires

Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques et de postes consulaires, en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d'accords particuliers.

#### CHAPITRE VII. DISPOSITIONS FINALES

##### *Article 28. Entrée en vigueur*

1. Chacun des gouvernements des États contractants notifie à l'autre, par la voie diplomatique, l'accomplissement des procédures internes exigées dans chaque État contractant pour l'entrée en vigueur de la présente Convention.

2. La Convention entrera en vigueur dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la dernière notification visée au paragraphe 1 et ses dispositions seront applicables :

a) Pour l'impôt perçu selon le régime de retenue à la source sur les montants payés, à partir du 1er janvier inclus de l'année civile suivant la date d'entrée en vigueur de la présente Convention.

b) Pour l'impôt sur la fortune, à partir du 1er janvier de l'année civile suivant la date d'entrée en vigueur de la présente Convention.

c) Pour les autres impôts, à tout exercice d'imposition commençant le 1er janvier ou à partir du 1er janvier de l'année civile suivant la date d'entrée en vigueur de la Convention.

d) Dans les autres cas, à la date d'entrée en vigueur de la Convention.

#### *Article 29. Dénonciation*

La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par un des États contractants. L'un quelconque des États contractants pourra notifier par écrit sa dénonciation à l'autre État contractant, par la voie diplomatique, avec un préavis de six mois au moins avant la fin de chaque année civile, à l'expiration d'une période de cinq ans à compter de son entrée en vigueur. Dans ce cas, la Convention cessera de produire ses effets :

a) En ce qui concerne l'impôt perçu selon le régime de retenue à la source, sur les montants payés à partir du 1er janvier inclus de l'année civile suivant celle de la notification de la dénonciation;

b) Dans les autres cas, le 1er janvier de l'année civile suivant celle de la notification de la dénonciation.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

FAIT à Madrid, le 9 octobre 2009, en deux exemplaires originaux, de teneur identique, en langue espagnole, les deux textes faisant également foi.

Pour le Royaume d'Espagne :

CARLOS OCAÑA PEREZ DE TUDELA  
Secrétaire d'État aux finances et budget

Pour la République orientale de l'Uruguay :

ALVARO GARCIA  
Ministre de l'économie et des finances

PROTOCOLE RELATIF A LA CONVENTION ENTRE LE ROYAUME D'ESPAGNE ET LA REPUBLIQUE ORIENTALE DE L'URUGUAY TENDANT A EVITER LA DOUBLE IMPOSITION ET A PREVENIR L'EVASION FISCALE EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE :

Afin de compléter la Convention tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, le Royaume d'Espagne et la République orientale de l'Uruguay sont convenus des dispositions suivantes, qui font partie de ladite Convention :

I. Addendum article 7 :

a) Si une entreprise d'un État contractant vend des biens ou des marchandises par l'intermédiaire d'un établissement stable situé dans l'autre État contractant ou si elle exerce dans celui-ci une activité commerciale ou industrielle, les bénéfices dudit établissement stable ne sont pas déterminés sur la base de la somme totale obtenue par l'entreprise mais bien uniquement sur la base de la somme imputable aux ventes effectives, ou à l'activité commerciale ou industrielle effective, de l'établissement stable en question;

b) Si une entreprise possède un établissement stable dans l'autre État contractant, les bénéfices obtenus par cet établissement stable par le biais de contrats, en particulier de projets, de fournitures ou de construction de matériel ou d'installations industrielles, commerciales ou scientifiques ou de contrats publics ne seront pas déterminés sur la base du prix total du contrat concerné mais bien uniquement sur la base de la partie du contrat qui est effectivement exécutée par l'établissement stable dans l'État contractant où il est situé. Les bénéfices issus de la fourniture de marchandises à l'établissement stable et les bénéfices issus de la partie du contrat exécutée dans l'État contractant dans lequel se trouve le siège de la maison mère de l'entreprise sont uniquement imposables dans cet État;

c) Les rémunérations de services techniques, y compris d'études ou de projets scientifiques, géologiques ou techniques ou de contrats de construction, y compris les plans correspondants, ou des activités d'assistance ou de supervision seront considérées comme rémunérations aux effets de l'application de l'article 7 de la Convention.

II. Addendum au paragraphe 3 de l'article 12

Sont entendus comme compris dans la définition de cet article 12, les montants payés pour l'usage ou la concession de l'usage de noms, d'images et autres droits de la personnalité équivalents.

III. Addendum à l'article 25

Souhaitant faciliter les échanges de renseignements dans le cadre de l'application de l'article 25 de la Convention, il est entendu que l'article 25 sera appliqué conformément aux directives suivantes :

A. Définitions :

Aux fins du présent Protocole, il est entendu que :

a) L'expression « mesures pour recueillir des renseignements » signifie toute disposition légale et toute procédure administrative ou judiciaire qui permet à un État contractant d'obtenir et de fournir les renseignements demandés;

b) Le terme « renseignements » comprend toutes les données, déclarations ou documents, indépendamment de leur nature;

c) L'expression « organisme d'investissement collectif » signifie tout moyen d'investissement collectif, indépendamment de sa forme juridique;

d) Le terme « notification » désigne la remise de documents à des résidents de l'un ou l'autre des États contractants quel qu'il soit, conformément à la réglementation sur les notifications en vigueur dans cet État.

B. Échange de renseignements sur demande préalable :

1. L'autorité compétente d'un État contractant fournira, sur demande préalable, les renseignements aux fins prévues à l'article 25. Ces renseignements seront échangés indépendamment du fait que la conduite qui fait l'objet de l'enquête puisse constituer un délit pénal selon la législation de cet État contractant si cette conduite avait eu lieu dans cet État.

2. Si les renseignements en possession de l'autorité compétente d'un État contractant ne sont pas suffisants pour pouvoir répondre à la demande, cet État contractant recourra à toutes les mesures pertinentes pour recueillir les renseignements afin de les fournir à l'autre État contractant, indépendamment du fait que le premier État contractant puisse ne pas avoir besoin de ces renseignements à ses propres fins fiscales.

3. Si l'autorité compétente d'un État contractant le demande expressément, l'autorité compétente de l'autre État contractant fournira les renseignements en vertu des dispositions de l'article 25, dans la mesure autorisée par son droit interne, sous forme de déclarations de témoins et de copies certifiées conformes de documents originaux.

4. Chaque État contractant garantit que, aux fins énoncées à l'article 25, ses autorités compétentes sont habilitées à obtenir et fournir, sur demande préalable, les renseignements qui se trouvent en possession de banques, d'autres institutions financières et de toute personne quelle qu'elle soit, qui agit en qualité de représentante ou de fiduciaire, y compris les agents agréés et les fidéicommiss.

5. Chaque État contractant fait appel à toutes les mesures pertinentes afin d'obtenir et de fournir, aux fins énoncées à l'article 25, sur demande préalable :

a) Les renseignements relatifs à la propriété légale et effective, de sociétés de capitaux, sociétés de personnes, fidéicommiss, fondations et autres personnes, y compris, avec les restrictions établies à l'article premier de la Convention, les renseignements ayant trait à la propriété par rapport à toutes les personnes qui composent une chaîne de propriété, notamment, dans le cas des organismes d'investissement collectif, des renseignements sur les participations, les actions et autres unités;

b) Dans le cas de fidéicommiss, des renseignements sur les fondateurs du trust, les fiduciaires et les bénéficiaires;

c) Et dans le cas de fondations, des renseignements sur les fondateurs, les membres du conseil de la fondation et les bénéficiaires.

6. L'autorité compétente d'un État contractant transmet les renseignements demandés dès que possible à l'autre État contractant. Afin de garantir la célérité de la réponse, l'autorité compétente du premier État contractant :

a) Accuse réception de la demande par écrit à l'autorité compétente de l'autre État contractant au plus tard dans les quinze jours calendrier qui suivent sa réception.

b) Notifie, le cas échéant, l'autorité compétente de l'autre État contractant des manquements présents dans la demande dans un délai de soixante jours à compter de l'accusé de réception.

c) Si l'autorité compétente du premier État contractant n'a pas pu obtenir et fournir les renseignements demandés dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de l'accusé de réception, elle en informe immédiatement l'autre État contractant, en expliquant les motifs de cette situation, la nature des obstacles ou les raisons de son échec. L'autre État contractant décide alors s'il annule ou non sa demande. S'il décide de ne pas l'annuler, les États contractants, de manière officieuse et directe, par le biais d'un accord à l'amiable ou autrement, analysent les possibilités d'atteindre l'objet de la demande et se consultent entre eux sur les moyens de parvenir à cet objectif.

d) Fournit les renseignements au plus tard dans un délai de six mois à compter de l'accusé de réception. Dans certains cas particulièrement complexes, les autorités compétentes peuvent accorder des délais plus longs.

Les restrictions provisoires énoncées au présent article n'affectent d'aucune manière la validité et la légalité des renseignements échangés en vertu de la présente Convention.

7. Les autorités compétentes des États contractants décident de commun accord du mode de remise des demandes de renseignements à l'État requis et, en cas de délégation, elles communiquent le nom de l'organisme chargé d'échanger les renseignements.

#### C. Possibilité de rejeter une demande :

1. Les dispositions de la présente Convention n'imposent pas à un État contractant l'obligation d'obtenir ou de fournir des renseignements qui pourraient révéler des communications confidentielles entre un client et un avocat ou un autre représentant légal reconnu, lorsque ces communications doivent servir :

a) À demander ou à prêter une assistance juridique ou

b) À être utilisées dans une procédure juridique en cours ou prévue.

2. Un État contractant peut rejeter une demande de renseignements si l'autre État contractant demande ces informations en vue d'appliquer ou d'exécuter une disposition de ses propres lois fiscales, ou toute requête y ayant trait, et qui s'avère discriminatoire vis-à-vis d'un ressortissant ou d'un citoyen du premier État contractant par rapport à un ressortissant ou un citoyen de l'autre État contractant, dans les mêmes circonstances.

#### D. Demandes de notification.

Il est entendu que la coopération entre les deux États contractants comprend l'aide à la notification encadrée dans les dispositions suivantes :

1. Les autorités d'un État contractant, à la demande des autorités compétentes de l'autre État contractant, et conformément aux lois qui régissent la notification de tels instruments dans le premier État contractant, notifient dès que possible, les résolutions et tout autre instrument émis par les autorités administratives de l'autre État contractant et

qui ont un rapport avec l'application des impôts de toute nature et de toute dénomination exigibles par les États contractants.

2. Avec l'émission de la demande de notification, et si elles disposent de ces données, les autorités compétentes d'un État contractant communiquent aux autorités compétentes de l'autre État contractant le nom, le domicile et toute autre donnée pertinente relative au destinataire.

3. Les autorités compétentes d'un État contractant accusent réception de la demande par écrit aux autorités compétentes de l'autre État contractant et les informent de tout manquement éventuel relatif à ladite demande.

4. Les autorités compétentes des États contractants peuvent établir de commun accord la voie utilisée pour la transmission des demandes de notification.

#### E. Langue.

Les demandes et leurs réponses doivent être rédigées en langue espagnole.

#### IV. Limitation des bénéficiaires

1. La Convention n'est pas applicable aux sociétés ou entités assujetties à un des régimes suivants :

a) Sociétés Anonymes Financières d'Investissement (SAFI), tant qu'elles continuent à profiter du régime fiscal visé par la loi n° 11.073, du 24 juin 1948, ou de ses modifications ultérieures;

b) Institutions Financières Externes (IFE), tant qu'elles continuent à profiter du régime fiscal visé par le Décret du 17 août 1989 ou par ses modifications ultérieures;

c) Les zones franches prévues par la loi n°15.921, ou ses modifications ultérieures, en matière de prestations de services financiers.

Les dispositions des alinéas a) et b) ne sont pas applicables si l'Uruguay est disposé à échanger des renseignements relatives à ces entités, selon les termes convenus dans la présente Convention.

#### 2.

a) La présente Convention doit être interprétée de manière à ne pas empêcher un État contractant d'appliquer ses normes internes pour éviter l'évasion et la fraude fiscale.

b) Les États contractants déclarent que leurs normes et procédures de droit interne relatives aux abus de la réglementation (y compris les accords fiscaux) sont applicables afin de lutter contre de tels abus.

c) La présente Convention n'empêche pas les États contractants d'appliquer leurs règlements internes en vue de la transparence fiscale internationale.

d) Les dispositions des articles 10, 11 et 12 ne sont pas applicables lorsque le ou les buts primordiaux de toute personne concernée par la création ou la cession des actions ou autres droits générateurs de dividendes, par la création ou la cession de la créance génératrice d'intérêts, par la création ou la cession du droit générateur de redevances, est d'obtenir le bénéfice de ces articles grâce à cette création ou cession.

#### V. Pour une application correcte de la Convention

a) Afin de pouvoir appliquer la présente Convention, les États contractants délivreront des certificats de résidence « aux fins de l'application » de la présente Convention à

leurs résidents. Ces certificats attesteront que la personne est assujettie aux impôts établis dans la législation interne de cet État. Les autorités habilitées pour l'émission des certificats de résidence sont :

Dans le cas de l'Espagne : l'Agence de l'État de l'administration fiscale (Agencia Estatal de Administración Tributaria), et

Dans le cas de l'Uruguay : le Ministère de l'économie et des finances ou l'organisme auquel il a délégué la fonction.

Au cas où un État contractant modifierait les formalités ou l'autorité qui délivre ces certificats de résidence, ledit État s'engage à en informer l'État contractant conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 24 de la présente Convention.

b) Dans le cas de l'Uruguay, en ce qui concerne les paiements versés à des résidents en Espagne, au moment de la déductibilité des frais en Uruguay, on considèrera comme preuve du paiement des impôts en Espagne la présentation du certificat de résidence visé au paragraphe précédent.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

FAIT à Madrid, le 9 octobre 2009, en deux exemplaires originaux, de teneur identique, en langue espagnole, les deux textes faisant également foi.

Pour le Royaume d'Espagne :

CARLOS OCAÑA PEREZ DE TUDELA  
Secrétaire d'État aux finances et budget

Pour la République orientale de l'Uruguay :

ALVARO GARCIA  
Ministre de l'économie et des finances